



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**El vicio de la voluntad en la oferta frente a la inaplicación de
infracción administrativa, en la subasta inversa electrónica de la
Ley N° 30225, Lima 2020.**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
ABOGADO**

AUTOR:

Portocarrero Canchari, Humberto (ORCID-0000-0001-9975-5427)

ASESOR(A):

Mg. Aceto, Luca (ORCID-0000-0001-8554-6907)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Estudio sobre los actos del Estado y su regulación entre actores interestatales y
su relación pública privada - Gestión Pública

LIMA - PERU

2021

DEDICATORIA

La presente investigación está dedicada a mi familia, en especial recuerdo de mi abuelo Teófilo y mi cuñado Antonio, quienes en vida clamaron por justicia humana y ahora gozan de justicia en lo divino en la presencia de Dios.

Asimismo, dedico a todo aquel perseverante sujeto capaz de buscar salir adelante para el bien propio y el de su familia.

Como también a todo sujeto de derecho con honesta y humilde en el saber de las contrataciones públicas su problemática con el propósito de mejorar su aplicación.

AGRADECIMIENTO

Primero agradezco a Dios por la vida, a mis abuelos, mi padre Humberto y su esposa, mi madre, mi pareja y a mis hermanos, tíos y tías que en el proceso de mi formación sacrificaron tiempo de gratos de momentos que para con algunos no serán recuperables.

También quiero agradecer a los docentes por su gran tolerancia y comprensión en mi proceso de formación y a todos los participantes por su atención y sus buenos deseos.

Índice de contenidos

	Pág.
Carátula	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Índice de contenidos	v
Índice de tablas	vi
Resumen	vii
Abstract	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	4
III. METODOLOGÍA	11
3.1 Tipo y diseño de investigación	11
3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización	12
3.3 Escenario y estudio	14
3.4 Participantes	14
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	16
3.6 Procedimiento	17
3.7 Rigor científico	18
3.8 Método de análisis de datos	18
3.9 Aspectos éticos	19
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	20
V. CONCLUSIONES	31
VI. RECOMENDACIONES	32
REFERENCIAS	33
ANEXOS	

Índice de tablas	Pág.
Tabla 1 Matriz de categorización	13
Tabla 2 Lista de entrevistados - Abogados Litigantes, especialistas en la Administración Pública:	15
Tabla 3 Validez del instrumento:	17
Tabla 4 Categorización:	17

RESUMEN

En el presente trabajo de investigación intitulado “El vicio de la voluntad en la oferta frente a la inaplicación de infracción administrativa, en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, Lima 2020”; tuvo como objetivo general analizar de qué manera el vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020.

El método científico usado para este estudio fue el enfoque cualitativo de tipo básica y con diseño de teoría fundamentada; además, se usaron métodos de recolección de datos, como guías de entrevistas a especialistas y guía de análisis documental jurisprudenciales y doctrinarias que fueron importantes para el logro de los resultados.

En conclusión, se pudo verificar que el error como vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa, en la subasta inversa electrónica, porque una oferta con evidente desproporción inferior puede implicar la declaración del precio unitario en lugar del precio total, debiendo la Administración valorar los hechos facticos, previo al otorgamiento de la buena pro, a fin de comprobar que la real voluntad no se encuentra distorsionada.

Palabras clave: *Subasta inversa, vicio de la voluntad, error, oferta, Administración Pública.*

ABSTRACT

In the present research work entitled "The vice of the will in the offer against the inapplication of administrative infringement, in the electronic reverse auction of Law No. 30225, Lima 2020"; Its general objective was to analyze how the defect of the will in the offer affects the non-application of an administrative infraction in the electronic reverse auction of Law No. 30225, in Lima 2020.

The scientific method used for this study was the qualitative approach of a basic type and with grounded theory design; In addition, data collection methods were used, such as guides for interviews with specialists and a guide for jurisprudential and doctrinal documentary analysis that were important for the achievement of the results.

In conclusion, it was possible to verify that the error as a vice of the will in the offer affects the inapplication of an administrative infringement, in the electronic reverse auction, because an offer with evident disproportion may imply the declaration of the unit price instead of the total price, the Administration having to assess the factual facts, prior to the granting of the good will, in order to verify that the real will is not distorted.

Keywords: *Reverse auction, vice of will, error, offer, Public Administration.*

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el uso de la tecnología de información y comunicación en los procedimientos administrativos avanza de manera acelerada en los organismos gubernamentales, progresivamente se ha implementado procedimientos electrónicos en las contrataciones públicas, permitiendo a las instituciones contratar bienes y servicios para cumplir con sus fines públicos y sociales, bajo los principios de eficiencia, eficacia y principio de equidad, entre otros (Contreras, 2017). Así, las plataformas virtuales han dado paso a los mecanismos electrónicos para transmitir la voluntad del agente, tradicionalmente manuscrito. Uno de los procedimientos de contratación pública es la subasta inversa electrónica, que es un novedoso procedimiento que permite a las empresas privadas mejorar el precio de sus ofertas por medio de pujas o lances virtuales, a través de este procedimiento la Administración Pública adquiere bienes y servicios a precios más bajos del mercado, señaló Cossío (2009).

Así, en el Perú la subasta inversa electrónica se encuentra regulada a través de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, actualizado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la cual conforme con el numeral 110.1. del artículo 110° del Reglamento, la define como “(...) se contratan bienes y servicios comunes. El postor ganador es aquel que oferte el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de dicha Subasta. El acceso al procedimiento de Subasta Inversa Electrónica se realiza a través del SEACE”.

Al respecto, Chamorro (2019), ha señalado que en el Perú la subasta inversa electrónica formaría parte de un cambio radical que podría generar problemas jurídicos en el procedimiento de contratación, por lo que es importante conocer bien el uso de esta forma de adquisición de bienes y servicios. Por su parte Alejos (2019), manifestó que una de las limitaciones en las subastas inversas electrónicas sería la inexperiencia de los usuarios del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) a cargo del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y las dificultades de los instructivos de su uso, que implicarán errores en la presentación electrónica de ofertas.

En efecto, se discutió el vicio de la voluntad en la oferta cuando se consigna el precio unitario, pero correspondía consignarse el precio total, según la Administración Pública, pues se declara al precio unitario como monto total mínimo válido y se otorga la buena pro al postor al ostentar el precio más bajo; no obstante, el adjudicatario al conocer el monto del contrato que deberá formalizar no cumple con su obligación de suscribir el contrato, produciéndose la pérdida de la buena pro, lo cual significa que pierde el derecho de suscribir el respectivo contrato, y es sancionado con un multa pecuniaria por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, quien inicia un procedimiento sancionador por los supuestos contemplados en el literal a) o b), del numeral 50.1 del artículo 50° la Ley de Contrataciones del Estado, que establecen como infracción administrativa las conductas siguientes: “Desistirse o retirar injustificadamente su oferta” e “Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco”.

En ese sentido, se vienen causando el agravio económico al postor como participante, apartándose de los principios de eficiencia, eficacia y principio de equidad de la Ley N° 30225, toda vez que se espera el plazo del consentimiento, perfeccionamiento, la publicación de pérdida de buena pro e invitación al postor que ocupó el segundo lugar, transcurriendo 26 días hábiles aproximadamente, siendo perjudicial para el interés público o social. Asimismo, basado en el principio de buena fe, es discutible la responsabilidad de la Entidad tanto del OSCE, como desarrollador, administrador y operador del SEACE, de acuerdo al artículo 52 de la Ley N° 30225, por lo que debe ser modificado tanto el marco legal y el SEACE.

Advertida esta disyuntiva, ha sido importante comprender, desde una función objetiva económica social, la doctrina jurídica del error como vicio de la voluntad, para adentrarnos en concreto a sus tipos; error de hecho y error de derecho. Estos factores no están siendo valorados por la Administración Pública y denuncian a los postores por incumplimiento del perfeccionamiento contractual, sancionándolos con multas por la infracción administrativa de incumplimiento de perfeccionamiento del contrato, la misma que trasgrede respetando los principios de razonabilidad y tipicidad, la cual su inobservancia representa una transgresión de los límites de la potestad sancionadora, citando a Ocampo (2011).

De esta manera, el **problema general** de este trabajo fue; ¿De qué manera vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020?, Asimismo, los **problemas específicos** versaron sobre ¿Cuál es efecto de la aplicación del principio de razonabilidad de la sanción frente al error de derecho en la declaración de oferta? y ¿Cuál es el efecto del error de hecho del proveedor frente a la sanción basada en el principio de tipicidad?

Por lo tanto, la presente investigación tuvo como **objetivo general** analizar de qué manera el vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020. Asimismo, los **objetivos específicos** tienen como finalidad tratar de determinar efecto de la aplicación del principio de razonabilidad de la sanción frente al error de derecho en la declaración de oferta; y, finalmente, Identificar cuál es el efecto del error de hecho del proveedor frente a la sanción basada en el principio de tipicidad.

La estructura de este trabajo, comprendió el desarrollo de metodologías y técnicas de entrevistas para recibir las opiniones y criterios relevantes de especialistas de Lima y a partir de ello demostrar la afirmación o contradicción a nuestros supuestos generales y específicos, que servirán de aporte en el ámbito jurídico académico.

II. MARCO TEORICO

Esta investigación tratará de manera importante otros trabajos previos realizados a nivel nacional con la finalidad de dar sustento a nuestra teoría, siendo los siguientes:

Cieza (2015), señaló en su artículo académico *“Error y responsabilidad precontractual”*, que es importante para el ámbito jurídico comprender las doctrinas del error como vicio de la voluntad, toda vez que es relevante en la formación de un contrato, pues califica la validez e invalidez del acto volviéndose trascendental para el negocio su estudio teórico en el mundo jurídico.

Paz (2018) argumentó en la tesis *“Análisis de los términos “malicioso” o “manifiestamente infundado” contenidos en el artículo 50°.1 inciso n) de la Ley de Contrataciones del estado: entre la discrecionalidad y la arbitrariedad administrativa”*, el cual tuvo como objetivo general precisar cuál debe ser el contenido de los términos “malicioso” o “manifiestamente infundado”, recogido en el 50°.1 inciso N de la LCE a fin de evitar decisiones arbitrarias de la Administración Pública, Paz (2018), concluyó que se entorpece el debido procedimiento cuando se usan términos con una amplia posibilidad de subjetividad en la tipificación de conductas dando lugar a un arbitrariedad de criterios al órgano con potestad sancionadora.

Asimismo, Contreras (2017), investigó en su tesis *“Las sanciones administrativas en las contrataciones públicas: Un estudio comparativo de Perú, Chile, Colombia y México”*, teniendo una de investigación cualitativo con diseño de jurídico-comparativo y, además, presentando como objetivo general analizar en forma comparativa las sanciones administrativas en las contrataciones públicas y el procedimiento administrativo sancionador en Perú, Chile, Colombia y México. En ese sentido, Contreras (2017) concluyó que se afecta la competitividad cada vez que la sanción es más drástica existiendo menos proveedores interesado en contratar con el Estad, asimismo, sugirió una adecuada formación del personal para procedimientos electrónicos.

Colachagua (2019), investigó sobre *“La nulidad como figura jurídica para sanear irregularidades durante el proceso de selección en la ley de contrataciones*

del estado, análisis de la Resolución N° 3059-2016-TCE-S2”, teniendo como objetivo general describir cómo la figura jurídica de la nulidad permite sanear las irregularidades ocurridas durante un proceso de selección en el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado. Concluyó que, a través de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General, la Ley N° 30225, Ley de Contratación del Estado, permite la figura de la nulidad para el saneamiento de algunas irregularidades dentro del proceso de compra, debiendo tener en cuenta los servidores públicos los fines de la ley especial y sus principios a fin de evitar daños a los proveedores y la población se vea perjudicada.

Asimismo, Chaparro y Cortez (2020), estudió la tesis *“Procedimiento Sancionador en las Contrataciones del Estado y su adhesión al Régimen Sancionador del Procedimiento Administrativo General”*, como objetivo general tuvo que determinar cómo el procedimiento sancionador en las contrataciones del Estado se adhiere al régimen sancionador del procedimiento administrativo general, de los administrados del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado Lima 2020. Chaparro y Cortez (2020), concluyó que el procedimiento sancionador no se aplica correctamente, toda vez que no se garantiza los principios del debido procedimiento, principio de culpabilidad y principio de razonabilidad, por lo que recomienda una reforma de la Ley de Contrataciones del Estado que garantice los principios que establece Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Por otro lado, como antecedentes internacionales encontramos a Chamorro (2019), Análisis jurídico sobre la subasta inversa electrónica en el proceso de contratación pública. La investigación tuvo como objetivo general analizar jurídicamente el procedimiento de subasta inversa electrónica para tratar de solucionar los problemas jurídicos que se desprenden al adquirir bienes y servicios normalizados. Asimismo, la metodología usada fue normativista, deductiva y exegética, aplicada desde un enfoque cualitativo con nivel descriptivo. Además, realizó la técnica de revisión de datos de resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública y aplicó entrevistas a los usuarios de dicho sistema, entre Entidades y proveedores. Chamorro (2019) concluyó que la fase precontractual presenta mayor índice de problemas al no estar debidamente

estipulada, toda vez que los proveedores realizan pujas demasiado bajas y no existe especialistas que logren una buena administración del contrato. Recomendó que, para evitar pujas demasiadas bajas, es necesario que existan límites a las pujas y que las Entidades cuenten con un profesional de derecho a fin de evitar perjuicio hacia algunas de las partes intervinientes.

Por su parte Calle (2017), analizó en su investigación el proceso administrativo y su incidencia en las adquisiciones de las subastas inversas electrónicas de compras públicas en el hospital del día iess, año 2015. El objetivo general que tuvo era conocer el proceso administrativo por subasta inversa electrónica de compras públicas en el hospital del día iess jipijapa, año 2015. Asimismo, el diseño de la investigación fue descriptivo y usó el método deductivo y estadístico, como también la técnica de entrevistas a los funcionarios que laboran en el departamento de compras públicas del hospital. Calle (2017) obtuvo la conclusión que existieron vulneraciones sustanciales al no absolverse todas las consultas por lo que se tuvieron que cancelar algunos procesos. En ese sentido, recomendó que se debe aclarar todas las consultas contando con sus respectivas actas.

García (2014), en su tesis *Ineficacia de los contratos por vicios de la voluntad*. Como objetivo principal de dicho trabajo tuvo que realizar un estudio a fondo de aquellos supuestos de vicios de la voluntad que implican la pérdida de la eficacia de los contratos. Así analizó en primer lugar los supuestos de anulabilidad basados en errores en el objeto y, por último, se procedió a analizar los más evidentes de los vicios de la voluntad, que son aquellos en los que el consentimiento procede de intimidación o violencia. García concluyó que, el error consiste en el consentimiento de la declaración con una idea equivocada de la realidad, la cual puede resultar más fácil de probar cuando existe una evidente afectación del contratante, siendo requisito que sea sustancial y no sea por una falta de diligencia del agente.

Frutos (2016) estudió la evaluación de la transparencia y no discrecionalidad en los procesos de subasta inversa en el gobierno autónomo descentralizado municipio de mocha. Planteó como objetivo general evaluar el cumplimiento de la transparencia y no discrecionalidad de los procedimientos de

subasta inversa del gobierno autónomo descentralizado municipal de mocha. Frutos (2016) aplica la investigación de carácter cualitativo y cuantitativo, empleándose la modalidad bibliográfica-documental, aplicó entrevistas y encuestas dirigidas a proveedores y funcionarios. Así, Frutos (2016) concluyó que existió afectación a los usuarios derivados de fallas técnicas, errores de forma o bajo conocimiento de uso del sistema que fueron mínimas. Por consiguiente, recomendó que se debe justificar documentalmente las decisiones de la autoridad administrativa para evitar criterios de discrecionalidad y así lograr adjudicar propuestas ajustadas al presupuesto estatal.

Así también, Muñoz (2017) explicó en su investigación la nulidad y sus efectos, causales del tribunal de contratación pública para negar la retroactividad. Como objetivo general se buscó entender cómo funcionaban los efectos específicos de la nulidad, empleando para ello como muestra de un conjunto de fallos del Tribunal de Contratación Pública, así como doctrina nacional e internacional. Muñoz (2017) concluyó que el interés público, la buena fe, los derechos adquiridos por un tercero, seguridad jurídica y situaciones jurídicas consolidadas son los mayores bienes jurídicos dignos de proteger por imperio del derecho que priman sobre para los efectos de derechos retroactivos, ya que de no ser así puede existir perjuicio para alguna de las partes, tanto adjudicatario y la Entidad.

Por otro lado, dejando al margen las investigaciones previas, fue necesario definir el **vicio de la voluntad**, partiendo por entender a la voluntad como la derivación del deseo y manifestación exteriorizada del agente para la existencia del acto y negocio jurídico opinó Torres y Salazar (2016). Asimismo, agregó Armas (2020), citando a Wagner (1985), debe existir el discernimiento de la persona capaz y madura, la intención del deseo del agente de concretar un acto y la libertad espontánea sin la existencia de una fuerza, *a contrario sensu*, en anomalía en una de ellas se origina el vicio. En ese sentido, el vicio de la voluntad es un defecto o anomalía en la mente del sujeto que daña el deseo o la intención verdadera de la declaración.

Ahora bien, el procedimiento de selección de subasta inversa electrónica, se encuentra regulada por el artículo 26 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 110 de su Reglamento. Al respecto, el Reglamento de la

Ley N° 30225, regula las etapas del procedimiento de selección por subasta inversa electrónica en el numeral 112.3 del artículo 112, estableciendo que: *“El desarrollo del procedimiento de selección, a cargo de las Entidades, se sujeta a los lineamientos y a la documentación de orientación que emite el OSCE”*. En esa línea, se emitieron las disposiciones a través de la Directiva N° 006-2019-OSCE/CD *“Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica”*. Además, el *“Manual de Usuario para Proveedores del Estado”* que contiene las orientaciones para la participación en una subasta inversa electrónica para la adquisición de bienes, según la Ley N° 30225.

Asimismo, es importante mencionar al sistema de contratación por precios unitarios previsto en el literal b), artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que: *“(...) el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios en función de las cantidades referenciales contenidas en los documentos del procedimiento de selección (...)”*. Además, se añade que el contenido de oferta está determinado por el monto de la oferta y el detalle de precios unitarios, que de conformidad al literal f) del artículo 52 del Reglamento de la Ley N° 30225, establece que: *“(...) cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los documentos del procedimiento de selección”*. Por último, señalar el último párrafo del mismo cuerpo normativo precitado, que se señala que: *“(...) Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos decimales”*.

Bajo lo expuesto, para el caso de los procedimientos de subasta inversa electrónica su acceso al SEACE es obligatorio, así se encuentra previsto en el numeral 7.2.2, de las Disposiciones Específicas de la Directiva N° 006-2019-OSCE/CD. Este sistema es una plataforma electrónica donde los postores realizan el registro de la información de sus ofertas, siendo la última etapa la de lances en línea, donde se vuelve imprevisible el mecanismo y el sujeto se encuentra sometido a las condiciones contempladas en el numeral 7.3.2 del mismo cuerpo normativo. Consecuentemente, el sistema opera como un medio transmisor de la voluntad de los ofertantes cuando algunos de estos opten por mejorar el precio de su oferta, los cuales no pueden ser inferiores al anteriormente registrado, siendo el efecto final el acto de adjudicación de la buena pro, emitido por el órgano a cargo del procedimiento y que forma parte de la Entidad, según Torres (2014). El

otorgamiento de la buena pro es el acto decisorio sobre si la oferta declarada podrá surtir efectos jurídicos por reunir los requisitos contemplados en el ordenamiento jurídico, teniendo como primordial relevancia el precio que ostenta el mejor postor, ganándose así el derecho expectantico y la obligación de contratar con la Entidad pública, argumentó Rubio (2009).

Es en este proceso de formación de un contrato la voluntad del agente declarante pudo verse afectado en el momento de realizar su oferta por error en cumplimiento de una norma jurídica. Así, el **error de derecho**, es un tipo cuya definición para Martínez es el desconocimiento o ignorancia de una norma en su aplicación o interpretación de su contenido (2014). En el Código Civil Peruano, conforme el numeral 3 del artículo 202°, establece que el error es esencial: *“Cuando el error de derecho haya sido la razón única o determinante del acto”*

Por otro lado, Bramont-Arias señaló que, el error de derecho se presenta cuando la voluntad de la conducta está determinada por una falsa representación de norma o ignorancia de esta (1997). Risco (2020), determinó que el error de tipo se encuentra en la tipicidad y el error de prohibición se encuentra en la culpabilidad. Sobre esta base del principio de tipicidad que rige tanto para el Derecho Penal y Derecho Administrativo debemos señalar que el Tribunal de Contrataciones del Estado cuando sanciona una conducta esta debe estar determinada como infracción administrativa, las cuales hacen referencia a las conductas previstas por el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225.

Al respecto, en relación al párrafo precedente, hemos mencionado tales principios porque el error de derecho que parte del particular traerá como consecuencia, al considerar que la voluntad del agente es correcta, el acto administrativo de otorgamiento de buena pro dictada por la autoridad administrativa, que es competente un funcionario, en caso de ser el responsable el órgano encargado de las contrataciones de seleccionar al proveedor ganador, o servidores públicos designados como comité de selección, define Ramos (2018).

Por otro lado, el **error de hecho**, es otro tipo de error que se produce cuando la Entidad forma un falso juicio de una situación esencial sin valorar y comprobar los hechos determinantes de su actuación dentro del campo del

Derecho Administrativo, según define Socías (2019). No obstante, en el ámbito del Derecho Penal, señaló González, que el error de hecho se diferencia del error de derecho, toda vez que el primero subsiste la culpa y no se elimina el dolo (2019).

El **principio de tipicidad** constituye un subprincipio constitucional que deriva del principio de legalidad, esencia básica del derecho sancionador, en el cual aquel se cumple cuando la conducta se encuentra precisamente definida de manera clara como falta y debiendo cumplir los estándares mínimos. Asimismo, dentro de los otros principios, también debemos señalar el **principio de razonabilidad**, que responden a un criterio razonable de la Entidad sancionadora en la decisión de la medida de sanción, donde se evalúa a luz del test de proporcionalidad, los subprincipios de idoneidad por su relevancia entre objetivo y finalidad, la necesidad que se busca alcanzar la sanción y la proporcionalidad en sentido estricto que pondera el bien jurídico de mayor peso, (Tribunal Constitucional, Proceso Inconstitucional, Expediente N° 0020-2015-PI/TC, Colegio de Abogados de Arequipa; 25 de abril de 2018).

De la revisión de la jurisprudencia, el Tribunal del OSCE desarrolló en sus anteriores resoluciones de aplicación de sanciones derivadas de subastas inversas electrónicas bajo sistema de precios unitarios, como la Resolución N° 996-2012-TC-S3, Resolución N° 369-2013-TC-S1, Resolución N° 1552-2014-TC-S1, Resolución N° 1883-2014-TC-S1, argumentando que “el Estado no busca salir favorecido desde su posición y prerrogativas a expensas de los errores de los postores o administrados”; en ese sentido ante un evidente perjuicio económico, el error es un factor que puede verse en la manifestación de voluntad del postor, recayendo en nulidad el acto, a contrario sensu sería un abuso de derecho que lesiona la buena fe y los fines económicos y sociales, en aplicación supletoria del artículos 168°, 201° al 203° y 1362°, del Código Civil.

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de Investigación:

El enfoque ha sido **cualitativo** porque partió de un desarrollo básico para construir un verdadero conocimiento social, bajo la comprensión del pensamiento lógico, que se ha realizado con la finalidad de obtener respuestas a las interrogantes del estudio, de tal manera que se permita obtener respuestas a las preguntas de investigación, teniendo como plan la aproximación de los objetivos supuestos. (Álvarez-Gayou, J., Martín, M., López. Maldonado, G., Trejo, A., Olguín, A., y Pérez, M. citó Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2019).

Al respecto, nuestro trabajo de investigación se ha identificado la preocupación de conocer de qué manera el vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020. En ese sentido, se analizó la incidencia del error a fin de ampliar el conocimiento en el ámbito jurídico.

Para Modesto, la investigación básica tiene como fin la satisfacción de una curiosidad humana que da el inicio de estudios nuevos que pueden transformar en cierta medida la percepción de otras teorías, además señala que guarda una vinculación con la investigación aplicada, ya que ambas identifican un problema (2019). Es importante señalar que el tipo de investigación que usamos en este trabajo es de **tipo básica**, por cuanto se buscó ampliar el conocimiento a partir de la recopilación de ciertas fuentes importantes, tales como libros, resoluciones, tratados, conferencias, etcétera, que resultan de real relevancia para la sociedad en este estudio científico (Centro de Recursos para el Aprendizaje, 2019). Asimismo, es teórica-jurídica ya que el método empleado propone un ordenado estudio de la ciencia para que pueda desarrollar específicamente la realidad, a través de la descripción, el análisis y valoración de los métodos de investigación, de acuerdo con Ponce de León (2015).

La **teoría fundamentada** al desarrollo de una teoría obtenida de la recopilación de datos de obtenidos de manera metodológica y analizada, es así que la recolección de información, el análisis y la teoría que nace presenta una precisa

vinculación entre estas. Un investigador no inicia un estudio con una teoría pre-sentenciada sobre la existencia de una armonía entre la ciencia y la creatividad existen de los procedimientos que proporcionan algún grado de estandarización y rigor al proceso. Se inicia con un área de estudio, surgiendo aspectos relevantes para probar el fenómeno surgido, según Giraldo (2011), citando a Strauss y Corbin, (2002).

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización:

Las categorías son vicio de la voluntad y la infracción administrativa, dichos temas que se tratarán en la investigación son los marcos de referencia para poder organizar los resultados obtenidos a través del análisis de casos, análisis jurisprudencial y entrevistas, los mismos que se encontraron acordes a los objetivos planteados. (Silva 2014, p.22).

En ese sentido, para efectos de esta investigación se desarrollan las siguientes categorías:

Tabla 1:

Tabla de categorización

Categorías	Definición Conceptual	Definición Operacional	Sub categorías
El vicio de la voluntad	El vicio de la voluntad es la anomalía o distorsión en la declaración de la manifestación de voluntad del agente que puede darse en la formación de un acto o negocio jurídico (Martínez, 2014, p. 10)	El vicio puede afectar la voluntad interna por error de derecho del postor y error de hecho de la Entidad. Según Martínez, existe error de derecho cuando se tiene un falso conocimiento de la norma o regla jurídica (2014, p. 18). Por otro lado, el error de hecho es determinada por una inexacta representación de la realidad, opinó Socías, (2002, p. 160).	<u>Sub categoría 1</u> Error de derecho <u>Sub categoría 2</u> Error de Hecho
Infracción administrativa	La infracción administrativa es la vulneración o el quebrantamiento de la norma jurídica, establecida en una ley o reglamento, la cual recae una sanción al trasgresor (López, 2012, p. 123)	Como consecuencia de la infracción el poder punitivo de la autoridad debe estar sujeta a una serie de principios señala Cordero (2013), surgiendo la tipicidad, que define preciso y claro el comportamiento sancionable, asimismo, debe contener una razonada disposición lógica entre la gravedad y la sanción (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017, pp. 72-73).	<u>Sub categoría 1</u> Principio de Razonabilidad <u>Sub categoría 2</u> Principio de Tipicidad

Fuente: Elaboración propia, Lima, 2020

3.3. Escenario de estudio:

La investigación se realizó en la ciudad de Lima por ser sede principal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y es lugar donde se concentran la mayor parte de denuncias por infracción a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y, además, en el cual se resuelven los recursos de reconsideraciones de impugnaciones por sanciones impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, los sujetos escogidos se ubicaron en redes sociales, que son especialistas en la materia y que cuentan con más de 5 años de experiencia trabajando en el sector público y/o privado. Además, es importante mencionar que las entrevistas se realizaron a través de medios electrónicos para facilitar el tiempo de los participantes, siendo el objeto de estudio los proveedores e instituciones públicas.

3.4. Participantes

Los sujetos que se ha optado por clasificar para la participación de este estudio son profesionales abogados especialistas y calificados, particulares o funcionarios públicos, que laboran o laboraron en el Sector Público y Privado y tuvieron participación en procedimientos de selección de subasta inversa electrónica. Los autores metodólogos Hernández et al. (2008) ha señalado que la población puede ser determinada como un grupo de individuos donde se estudia posiciones de diferentes índoles, pero dicho grupo tiene un carácter de información determinados que podrán ser similares.

La muestra es una parte representativa de una población, la cual ha representado un análisis de la información obtenida, dicho análisis nos ha permitido, deducir ciertas conclusiones generales y con un grado de certidumbre. (Briones, 1995, p.83).

En la presente investigación, se tomó en cuenta los siguientes criterios de elección de sujetos:

Tabla Nº 2: Participantes

Nombres y Apellidos	Grado Académico / Especialidad	Cargo/ Institución	Años de Experiencia
Cesar Enrique Ferreyros Aparicio	Abogado con especialidad en Derecho Administrativo y Civil	Independiente	20 años
Ernesto La Puente Ronceros	Abogado con especialidad en contrataciones con el Estado, Arbitraje, Derecho Administrativo y Asociaciones Públicas y Privadas	Socio de CPI Legal	10 años
Annie Carolina Mayo Baldoceda	Abogada especialista en contrataciones con el Estado y Gestión Pública	Abogada de la Oficina de Abastecimiento Ministerio Público	9 años
Lourdes Emelyn Zelaya Minaya	Abogada especialista en contrataciones con el Estado, Derecho Administrativo y Civil.	Analista Legal de Controversias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones	9 años
Lorena Murrieta Tochon	Abogada con especialidad en contrataciones con el Estado, Arbitraje y Gestión Pública.	Abogada del Área de Logística COPESCO-MINCETUR	6 años
Cesar Gustavo Pajuelo Quiniche	Abogado con especialidad en Derecho Administrativo y Civil	Abogado del Grupo Conecta	6 años

Fuente: *Elaboración propia, Lima, 2020.*

3.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos:

Para Martínez (2013), **las técnicas** ha sido un conjunto de herramientas, entre reglas, procedimientos, organizados orientados con el fin de la recopilación de información y datos, con el propósito de concretar los objetivos. Ahora bien, dentro de dichas técnicas de recolección de datos que hemos usado tenemos: la entrevista y el análisis de fuente de documentos.

Entrevistas: Se han realizado conversaciones con el propósito de obtener respuesta que coadyuvan a dar respuesta a la investigación. Caro (2019), ha señalado que es una técnica de conversacional entre dos personas, realizada por el investigador y el entrevistado. (Caro, 2019)

Análisis de Fuente Documental: Se realizó mediante esta técnica la búsqueda y análisis de los documentos de fuentes normativas, doctrinarios y jurisprudenciales, según García (1993).

Asimismo, para el presente trabajo de investigación se ha elaborado de manera abierta, clara y directa una guía de preguntas con la finalidad que el entrevistado pueda manifestar con total libertad sus conocimientos acerca del tema, y posteriormente nos permita brindar posibles soluciones al problema, tal instrumento se utilizará en el desarrollo de la investigación.

La validez del Instrumento para esta investigación se realizó con el apoyo del juicio de expertos, quienes empleando sus experiencias y conocimientos han validado la formulación de las entrevistas.

Tabla N° 3: Validez del instrumento

Cuadro de Validación de Instrumentos			
Instrumento	Validador	Cargo o Institución donde labora	Tipo de Docencia
Guía de Preguntas de Entrevista	Aceto, Luca	Docente de la Universidad Cesar Vallejo	Docente Temático
	La Torre Guerrero, Ángel Fernando		Docente Metodológico
	Castro Rodríguez, Liliam Lesly		Docente
	Ludeña Gonzales, Gerardo Francisco		Docente

Fuente: *Elaboración propia, Lima, 2020.*

3.6. Procedimientos

La investigación ha presentado categorías que han requerido ser desarrolladas; en ese sentido, los resultados cumplen con dar respuesta a las preguntas formuladas a fin de cumplir con la originalidad de los datos y la validez de su medio, siendo estos marcos de referencia de la organización de los resultados que se analizaron, como jurisprudencia y entrevistas. (Silva, 2014, p.22).

Para efectos de esta investigación, en base a lo dicho, se establece las siguientes categorías:

Tabla N 4: Categorización

Categorías	Sub categorías	
El vicio de la voluntad	<u>Sub categoría 1</u> Error de derecho	<u>Sub categoría 1</u> Error de hecho
Infracción administrativa	<u>Sub categoría 2</u> Principio de razonabilidad	<u>Sub categoría 2</u> Principio de Tipicidad

Fuente: *Elaboración propia, Lima, 2020*

3.7. Rigor Científico

El rigor científico empleado permite al investigador usar un plan de exploración interno con contextos diferentes.

Dependencia.- Se establece la confiabilidad y la razonabilidad que se ha obtenido en la recolección de información, datos, teorías y entrevistas, ejecutando un estudio particular a fin de obtener interpretaciones razonables que permitirá aprovechar los argumentos, para conseguir un mejor resultado y una mejor comprensión al problema general (Hernández et al., 2014).

Credibilidad.- En relación al criterio aplicado, ésta capta de forma objetiva la recolección de los datos, uno de ellos es el lenguaje de los entrevistados tanto verbal y no verbal, sus emociones y gestos, los cuales han sido válidos, para lograr una aproximación al estudio.

Transferencia. – Se han analizado diversos contextos, para arribar a posibles soluciones al problema general, se han examinado las teorías consistentes en la transferencia de información y resultados correspondiente a “El vicio de la voluntad en la oferta frente a la inaplicación de infracción administrativa, en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, Lima 2020”.

3.8. Métodos de análisis de Información:

El investigador debe de conocer los escenarios, actividades y procesos, por lo que no solo se debe recoger datos, también se debe buscar información conforme a los supuestos que se plantean. (Ruíz, 1996, p. 51).

El estudio ha considerado al método de análisis de datos, el investigador aplica los lineamientos y procedimientos en la recolección de información, correspondiente a datos relacionados a la investigación, a fin de que se han interpretados y respaldos, los datos conseguidos están básicamente vinculados con las categorías y los objetivos.

Método Deductivo: Se ha aplicado este tipo de método con la finalidad de lograr una conclusión razonable a partir de toda la información en general.

Método descriptivo: En este tipo método se ha descrito los caracteres de las categorías del trabajo de investigación, (Abreu, 2014)

3.9. Aspectos éticos:

La investigación ha respetado las normas de correspondientes tanto del orden público y las normas morales, asimismo las normativas del Derecho de Autor aprobado por el Decreto Legislativo N° 822, concordante con el Código de Ética Profesional sobre los datos recopilados, no se han vulnerado derechos, los resultados tanto los contenidos obtenidos han tenido una finalidad académica. Se emplearon instrumentos de recolección de datos que han respetado el consentimiento libre de los entrevistados, resguardando siempre sus derechos. Asimismo, se ha utilizado citas con las referencias bibliográficas disponibles bajo el estándar de American Psychological Association (APA), conforme el cumplimiento de las disposiciones de la Universidad César Vallejo.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES

Los resultados que se obtuvieron a través de los instrumentos de entrevistas de parte de abogados especialista, cuyo **objetivo general** ha sido “Analizar de qué manera el vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa, en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020”, siendo la **primera pregunta** “En su opinión ¿Considera usted que, para la validez de una oferta es relevante el discernimiento de la voluntad del proveedor, al tenerse como mejora un precio exorbitantemente inferior en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica?”.

Zelaya (2021), Pajuelo (2021) y Mayo (2021), están de acuerdo que la manifestación de voluntad parte de una intención interna del postor de querer contratar; en ese sentido, el discernimiento es expresado a través de la oferta con la intención de contratar, la cual una vez declarada se deberá cumplir. Asimismo, La Puente (2021), consideró que el participante realiza ofertas a sabiendas de su rentabilidad y no existiría vicio de la voluntad por error, ya que no le resulta creíble que un participante realice pujas y ofertas ignorando que los precios que propone le resultan lesivos, por lo que es evidente el detrimento patrimonial del propio participante o postor cabría la posibilidad del dolo. Por otro lado, Murrieta (2021), señaló que debería de existir límites a la oferta en comparación al valor referencial de la adquisición. Sin embargo, Ferreyros (2021), consideró que como lo que se busca es el menor precio no es relevante el discernimiento de la voluntad del proveedor.

Ahora bien, con respecto a la **segunda pregunta** “En su criterio ¿Por qué un proveedor que declaró como mejora un precio por debajo del 95% menor del valor referencial en una subasta inversa electrónica, en evidente perjuicio patrimonial para él, resultaría amparable legalmente inaplicar la infracción que constituye el incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad?”

Zelaya (2021), Murrieta (2021), Pajuelo (2021) y Ferreyros (2021), concordaron en considerar resultaría amparable legalmente, ya que podrían existir tanto factores internos y externos que influyen en la voluntad del proveedor al momento de formular su oferta, por lo que una oferta en detrimento del postor, corresponde el

escrutinio de los hechos, los cuales tendrían incidencia en la oferta declarada, como la caída del precio internacional, exceso de mercadería, el marco normativo especial, entre otros. Sin embargo, La Puente (2021) y Mayo (2021), señalaron que el precio en una oferta resulta obligatorio su cumplimiento, de lo contrario su incumplimiento es pasible de sanción administrativa, toda vez que afectar la competencia al realizar ofertas nada serias.

En relación a **tercera interrogante** fue “¿Está usted de acuerdo que el TCE considere, en evidente desproporción de una mejora de precio en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica, al error como factor ajeno a la voluntad del infractor?”

Ferreyros (2021), Zelaya (2021), Pajuelo (2021) y La Puente (2021), señalaron en no estar de acuerdo con en considerar al error como factor ajeno a la voluntad del infractor, pues los proveedores tienen la debida diligencia al momento de realizar una oferta y son responsables del error que cometan. Además, el precio puede tener la intención posicionamiento en el mercado de determinado rubro o remate de saldos de bienes, por lo que conocen bien si el precio les favorece o perjudica. No obstante, Mayo (2021), señaló que independiente de la debida diligencia, pueden existir casos fortuitos o de fuerza mayor ajenos a la voluntad del postor que pueden provocar errores los cuales pueden eximir de responsabilidad al proveedor.

Por otro lado, Murrieta (2021), destacó que el proveedor solo se basa en la información proporcionada por las instituciones, la responsabilidad no puede recaer en los proveedores por falta de información en la forma de declaración de ofertas; asimismo, se debe tener en cuenta que resulta relevante el precio unitario en el valor referencial en los sistemas de contratación por precios unitarios en las subastas inversas electrónicas.

Posteriormente, del **primer objetivo específico** se tuvo que “Determinar efecto de la aplicación del principio de razonabilidad de la sanción frente al error de derecho en la declaración de oferta”, siendo la **cuarta pregunta** sobre “En su opinión: ¿Cree usted que, de declararse ganador a un proveedor por establecerse en el proceso de Mejora de Precio del SEACE una indicación contraria a lo dispuesto al

Reglamento de la Ley N° 30225, perjudicaría o beneficiaría al proveedor en el cumplimiento del perfeccionamiento contractual con la Entidad?.

Al respecto, Ferreyros (2021), Zelaya (2021), Mayo (2021) y La Puente (2021) manifestaron estar de acuerdo que, la discrepancia de la norma y los efectos del uso de la plataforma del SEACE, perjudica al proveedor, ya que limitar el derecho del postor por disposiciones contrarias a la norma configura causal o vicio del acto, siendo la razón de no lograr el perfeccionamiento del contrato el adjudicatario. Asimismo, Murrieta (2021) señaló que, es posible que beneficie al postor que resulta ganador por ofertar el precio unitario en lugar del precio integral, ya que deja en desventaja a los demás postores, al no haber impedimento la Entidad no puede alegar que debió ofertar el precio total, por lo que el proveedor tiene el derecho a llegar a suscribir el contrato, pero si la Entidad interpreta que el precio unitario es el importe total de la oferta puede desistirse de su obligación de contratar por el perjuicio económico que le genera, teniendo luego que hacer valer su derecho en el sometimiento de procedimiento sancionatorio.

No obstante, Pajuelo (2021), señaló que el Reglamento de la Ley de Contrataciones como todo manual regula de manera general y no puede regular casos específicos en donde ni el postor, ni la entidad tienen claro cómo interpretar la norma, situaciones que, si puede encontrarse establecido en el SEACE, ya que lo que busca es justo tapar dichos vacíos.

La **quinta pregunta** fue “¿Considera usted que resulta evidente detectar el riesgo de incumplimiento de la obligación de contratar del proveedor, cuando la mejora de precio difiere exorbitantemente de sus demás competidores, en un precio 95% menor del valor referencial, en la subasta inversa electrónica?”

Los especialistas Ferreyros (2021), Zelaya (2021), Pajuelo (2021), Mayo (2021), La Puente (2021) y Murrieta (2021), consideraron que realizar una oferta 98% inferior al valor referencia es riesgoso el cumplimiento de contratar, pues la mejora del precio, al no tener en cuenta el valor referencial del mercado del bien o servicio a contratar genera la insatisfacción de las necesidades institucionales, el incumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional y de la finalidad

pública. Además, Murrieta (2021), advirtió que la Entidad no se opone a dicho error que se viene presentando por el diseño del procedimiento.

Continuando con la **sexta pregunta**, se planteó la interrogante “¿Cree usted que es incorrecto e ineficiente que la Entidad deba esperar el plazo de la obligación de contratar con el proveedor, habiendo este advertido en la misma fecha y después del otorgamiento de la buena pro el error involuntario en la mejora del precio de su oferta en el procedimiento en la subasta inversa electrónica?”

Sobre el particular, Ferreyros (2021) y Murrieta (2021), indicaron que es incorrecto e irregular la espera del término del plazo cuando el adjudicatario advierte una anomalía, ya que se vuelve ineficiente continuar con la espera cuando ya se manifestó un error en la oferta. Además, La Puente (2021), señaló que la comparación de otras ofertas ya debería generar alguna acción por parte de la Entidad; no obstante, el marco legal actual no permite accionarse antes, lo que significa que debería adoptarse un cambio normativo que prevea dichos supuestos para pérdida inmediata de la buena pro e iniciar el proceso sancionador.

Por otro lado, Pajuelo (2021), Zelaya (2021) y Mayo (2021), afirmaron que es correcto la espera, ya que los plazos son los mínimos y necesarios para que la Entidad pueda revisar también su acto, al no saber con exactitud si la reducción en la propuesta económica obedece a un error en los lances o a una situación de mercado, debiéndose respetar el plazo para el perfeccionamiento contractual, lo cual es parte de un debido procedimiento.

Finalmente, como **segundo objetivo específico** del instrumento de entrevista se pretendió “Identificar cuál es el efecto del error de hecho del proveedor frente a la sanción basada en el principio de tipicidad”. Se realizó la **séptima pregunta**, que fue “En su opinión ¿Cree usted que los defectos en la voluntad del proveedor, como el error, durante el procedimiento de selección de una subasta inversa electrónica son calificables como infracción administrativa, de acuerdo a la Ley N° 30225?”

La respuesta para Ferreyros (2021), Zelaya (2021) y Pajuelo (2021), señalaron que, si son calificables como infracción administrativa, al no realizar una oferta correcta e incumplir con su responsabilidad de diligencia. No obstante, Mayo (2021),

manifestó que el error no es causal de infracción sino de vicio accidental del acto que puede generar la invalidez de la oferta, en cambio la infracción está basada en la intencionalidad de un sujeto en la realización de determinada conducta. Por otro lado, La Puente (2021), opinó que el error no cabe en estos casos, pues el postor conoce perfectamente el mercado y las reglas definitivas del procedimiento de selección cuando participa y oferta; en consecuencia, se trataría de dolo y ello debería ser tipificado como infracción y pasible de sanción administrativa.

Murrieta (2021), señaló por el contrario a las respuestas de los demás especialistas, que el proveedor si llega hasta la etapa final con el precio unitario es lógico que se aplique una suma básica del precio unitario por la cantidad, siendo dicho resultado el monto contractual, sin embargo, por un error provocado por el OSCE, termina aceptando una sanción para no perder su capital o patrimonio.

Asimismo, la **octava pregunta** ha sido “¿Está usted de acuerdo en que, registrar una oferta económica desproporcionalmente baja para luego incumplir la obligación de contratar con la Entidad debe ser calificable como infracción administrativa?”; teniéndose como respuesta por parte de Ferreyros (2021), Zelaya (2021), Pajuelo (2021) y La Puente (2021), que dichos supuestos deben ser incluidas en el régimen sancionador por afectar a los demás postores con una intención claramente dolosa. Sin embargo, para Mayo (2021) y Murrieta (2021), señalaron que la declaración de una oferta con desproporción, que a la vez es temeraria, puede ser evaluada y considerada invalida, teniendo en cuenta el error de parte del sistema SEACE del OSCE.

En la **novena pregunta**, se planteó la interrogante sobre “En su opinión ¿Considera usted que, para el TCE prevalece más el hecho sobre la conducta, al calificar al proveedor con una infracción administrativa por incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad derivado de una oferta económica desproporcionalmente baja en un procedimiento de subasta inversa electrónica?”

Ferreyros (2021), Zelaya (2021) y Pajuelo (2021), consideraron estar de acuerdo que el hecho prevalece sobre la conducta, toda vez que el hecho se basa en situaciones o acontecimientos concretos que son verificables, en cambio la conducta contiene aspectos subjetivos. La Puente (2021), explicó que el error no

tiene cabida como infracción, ya que narró un caso en particular, el cual el TCE aplicó la sanción de multa con medida cautelar de inhabilitación temporal para contratar con el Estado aun proveedor por no perfeccionar el contrato, siendo un hecho objetivo lo acontecido y que solo resta determinar si hubo justificación o si existió imposibilidad física o jurídica para su celebración, dejando de lado al error.

Por otro lado, Mayo (2021), estableció que la conducta prevalece sobre los hechos, pues los actos son causantes de determinados sucesos. Asimismo, Murrieta (2021), señaló que el TCE, al parecer no está realizando un análisis del procedimiento que es provocado e inducido a error a los proveedores por ello es necesario delimitar la responsabilidad de la Entidad y de la OSCE.

En el análisis efectuado a **la guía documental** para el **objetivo general**, se utilizaron 3 documentos:

Sobre la Resolución N° 996-2012-TC-S3, se sustrajo del análisis de los fundamentos que resolvieron no haber lugar la imposición de sanción administrativa a la proveedora Reneé Buendía Paladín, cuando la oferta presenta un monto que resulta irrazonable e ilógico, en comparación al valor referencial, el error esencial es aplicable, pues la voluntad como resultado de la disconformidad entre el conocimiento y la realidad de las cosas pudo verse influenciada, siendo excepcional ésta aplicación en la relación jurídica con la Administración Pública. (Tribunal de Contrataciones del Estado, 2012).

Asimismo, se analizó los fundamentos de la Resolución N° 1552-2014-TC-S1, al no haber lugar la imposición de sanción a la empresa Troya Contratista Generales E.I.R.L., en su responsabilidad de no haber mantenido su oferta hasta el consentimiento de la buena pro, siendo que la oferta al ser perjudicial para el postor este no puede recaer en incumplimiento en su deber con la Administración, pues el el precio desproporcional inferior era evidente en comparación del valor referencial y a los demás competidores, por lo que el error como un factor ajeno a la voluntad del postor es causal de justificación, pudiendo la conducta ser justificada. (Tribunal de Contrataciones del Estado, 2012)

Además, el TCE, estableció en la Resolución N° 369-2013-TC-S1 que, si bien la omisión del presunto infractor se condice con el tipo de infracción establecido en la norma, pueden existir ciertos casos específicos de evidente manifestación en que dicha inacción ha sido influenciada por factores ajenos a la voluntad del actor, tales como el error, pues en evidente perjuicio patrimonial de aquel no puede la Administración establecer una relación jurídica. (Tribunal de Contrataciones del Estado, 2013). En ese sentido, se resolvió no ha lugar la imposición de sanción a la empresa Troya Contratista Generales E.I.R.L., en su responsabilidad de no mantener su oferta hasta el consentimiento de la buena pro, siendo la falta de correlación lógica y real entre la propuesta económica y el costo del producto en el mercado eximente de responsabilidad, ya que el factor error como vicio de la voluntad puede presentarse en propuestas con evidente desproporción real entre el monto ofertado y el costo del producto.

Por otro lado, continuando con el análisis documental, para **objetivo específico 1**, también se analizaron 3 fuentes documentales:

El literal b) del artículo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, estableciéndose que los efectos del SEACE como medio transmisor de la voluntad del declarante, no se condice con lo dispuesto con el Reglamento de la Ley N° 30225, existiendo una disposición contraria, induciendo a error la voluntad del postor que oferta un precio creyendo estar actuando legalmente, siendo aplicable el error de derecho, pues quien actúa inducido por la disposición de una norma jurídica, como es el caso de registrar el precio unitario conforme lo establece el reglamento, dicho acto puede ser considerado anulable por la distorsión jurídica.

Asimismo, el artículo “*Error material, error de hecho y error de derecho. Concepto y mecanismos de corrección*” de Socías (2002), concluyó El error de derecho es un tipo de vicio del acto administrativo, la cual corresponde la Entidad poder corregir, efectuando la revisión de oficio que contempla el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyo acto defectuoso puede ser nulo y retrotraerse hasta la etapa previa al vicio de la voluntad, toda vez que en el declarante actuó conforme al ordenamiento jurídico, utilizando la norma de mayor jerarquía.

Se agrega, el análisis del artículo 201°, 202° y 203° del Código Civil Peruano, destacando que la Administración, cuya intención es celebrar un negocio con un postor administrado, debe tener en cuenta el criterio del error establecida en el Código Civil, la cual establece al error de derecho como causa de anulación del acto jurídico ajeno a la voluntad del sujeto por distorsionada de una realidad jurídica, se ejecuta un acto creyendo actuar bajo una disposición normativa, generando así la invalidez del acto y la anulación respectiva, toda vez el sujeto actuó inducido a error de derecho que era conocible por la Administración.

En el caso del **objetivo específico 2**, se acudió como fuente jurisprudencia al TCE, que señaló que:

El TCE, en la Resolución N° 369-2013-TC-S1, señaló que, cuando existe un evidente desequilibrio en el contrato, la Entidad no puede obligar a un administrado a firmar contrato y a mantener su oferta bajo ciertas condiciones favorables exclusivamente para ésta, pues eso implicaría una desigualdad y trae un abuso del derecho por parte de la Administración, situación que si bien concuerda con la norma legal, pero que su ejercicio lesiona la buena fe y los fines sociales y económicos del Derecho”. (Tribunal de Contrataciones del Estado, 2013)

Al respecto, se infirió que, frente al acto con error de hecho recae la sanción de nulidad, el Estado debe valorar los hechos sin salir favorecido a expensas de los de los errores de los postores, pues de no valorar correctamente puede perjudicar económicamente a los postores manteniendo la validez del acto, simulando que este sirve a un interés público efectivo.

Asimismo, el artículo “*Error material, error de hecho y error de derecho. Concepto y mecanismos de corrección*” de Socías (2002), se analizó la falta de una adecuada delimitación genera confusión en el error de material y error de hecho en el ámbito del derecho administrativo, pues se vuelve incomprensible su entendimiento para la Administración. Se concluyó que el error de hecho, como consecuencia de que el precio unitario es más relevante que precio total en la ejecución del contrato, mereciendo la valoración de hechos facticos previo a emitir acto administrativo la Entidad, con la finalidad de comprobar los hechos, pues a pesar de una debida

diligencia pueden existir factores ajenos a la voluntad del postor que son esenciales para la validez del acto.

Finalmente, el TCE, estableció en su Resolución N° 1552-2014-TC-S1, que, la conducta del presunto infractor puede ser asociada a un error, lo cual no permite inferir o atribuir que en determinados casos este haya incurrido en la infracción establecida en la normativa, pues en la medida que la comisión de una infracción supone la realización de una conducta administrativamente ilícita dando merito a la asignación de responsabilidades sancionatorias por la afectación de los bienes jurídicos protegidos (Tribunal de Contrataciones del Estado, 2013).

Sobre el particular, se infirió que el error de hecho no se encuentra calificado como infracción sujeta a sanción, pues la conducta del agente que declara involuntariamente un precio en lugar de otro creyendo estar en lo correcto, la oferta forma parte de un acto evidentemente irrazonable, al no ser bien formulada puede ser justificación eximente de responsabilidad, teniendo en cuenta además que pudo ser advertida por la Administración Pública al momento de evaluar las ofertas presentadas por los postores.

Ahora bien, la **discusión** que se ha sostenido para el **objetivo general**; Analizar de qué manera el vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa, en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020; los entrevistados Zelaya (2021), Murrieta (2021), Pajuelo (2021) y Ferreyros (2021), señalaron estar de acuerdo que un precio por debajo del 95% menor del valor referencial en una subasta inversa electrónica, en evidente perjuicio patrimonial para el postor, resultaría ser amparable legalmente inaplicar la infracción porque pueden existir factores ajeno a la voluntad. No obstante, no concuerdan todos los entrevistados en estar de acuerdo que el error como vicio de la voluntad es un factor que deba analizarse, pues señalan algunos que se debe tener la debida diligencia, la cual no escapa de la responsabilidad exclusiva del postor.

Sin embargo, el propio Tribunal de Contrataciones del Estado, ha señalado pueden darse situaciones excepcionales donde se advierta evidentemente perjuicio patrimonial que la manifestación se vea influenciada por factores ajenos a la

voluntad del infractor, tales como el error (Fundamento N° 25, Resolución N° 369-2013-TC-S1). En ese sentido, Socías (2002), advierte que, a pesar de una debida diligencia pueden existir factores ajenos a la voluntad del postor que son esenciales para la validez del acto, mereciendo la valoración de hechos facticos previos a emitir acto administrativo la Entidad, teniendo en cuenta que el precio de la oferta es desproporcional, da merito la valoración de los hechos facticos previo a emitir acto administrativo la Entidad, con la finalidad de comprobar el acto.

Por lo tanto, una oferta en detrimento única para el postor debe corresponder el escrutinio de los hechos, los cuales tendrían incidencia en la oferta declarada por el postor.

Por otro lado respecto a la discusión del **objetivo específico 1**, debemos traer a colación lo señalado por los especialistas Ferreyros (2021), Zelaya (2021), Mayo (2021) y La Puente (2021) que manifestaron estar de acuerdo que, la discrepancia de la norma y los efectos del uso de la plataforma del SEACE, perjudica al proveedor, ya que limita el derecho del postor por disposiciones contrarias a la norma, lo cual configura causal o vicio del acto, siendo la razón de no lograr el perfeccionamiento del contrato el adjudicatario.

En ese sentido, del análisis de la fuente documental, se estableció que el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, señala que, en el sistema de contratación de “Precios Unitarios”, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios, toda vez que la cantidad a contratar no se encuentra determinada; no obstante, trayendo a colación el numeral 2.3 del Manual de Usuario para Proveedores del Estado y el numeral 7.3.2 de la Directiva N° 006-2019-OSCE/CD, que regulan el procedimiento de subasta inversa electrónica, no establecen expresamente que en el proceso de “Mejora Precios” se deba registrar el precio total o precio unitario, siendo el SEACE quien decide dicha acción a través de una alerta y comparación de la diferencia existente entre la mejora de precio y la oferta inicial que se está realizando, sin indicar expresamente que se debe registrar el precio total.

Sin embargo, a pesar de que se advierta dicho vacío, para Pajuelo (2021), el Reglamento de la Ley de Contrataciones como todo manual regula de manera

general y no puede regular casos específicos en donde ni el postor, ni la entidad tienen claro cómo interpretar la norma, situaciones que, si puede encontrarse establecido en el SEACE, ya que lo que busca es justo tapar dichos vacíos.

En ese sentido, se viene perjudicando a los postores que registran precios unitarios creyendo actuar conforme a una disposición jurídica que la Administración no estima conveniente revisar y que continua incidiendo a error a los postores, generándole un perjuicio económico por la pérdida de ganancias y además por la posible sanción de multa que recibirá.

Finalmente, respecto al objetivo específico 2, la discusión tiene se centra en que la conducta negligente o el incumplimiento de lo dispuesto por el SEACE no se encuentra califica como infracción, toda vez que Ferreyros (2021), Zelaya (2021), Pajuelo (2021) y La Puente (2021), señalaron que dichos supuestos deben ser incluidas en el régimen sancionador por afectar a los demás postores con una intención claramente dolosa.

En ese sentido, corresponde señalar la fuente documental de analizada, mediante la cual el TCE a través del Fundamento N° 12, Resolución N° 1552-2014-TC-S1, señaló que la conducta asociada a un error no debe inferirse o atribuirse que se haya incurrido en la infracción, toda vez que en el régimen sancionatorio la comisión de una infracción asume la ejecución de una conducta administrativamente ilícita.

Sin embargo, para Ferreyros (2021), Zelaya (2021) y Pajuelo (2021), señalaron que el hecho debe prevalecer sobre la conducta, toda vez que el hecho se basa en situaciones o acontecimientos concretos que son verificables, en cambio la conducta contiene aspectos subjetivos.

V. CONCLUSIONES

1. Se ha establecido que el error como vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa, en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, porque una oferta con evidente desproporción para el declarante implica un error, como es el caso de la declaración del precio unitario en lugar del precio total de la oferta, la cual al comprobarse los hechos facticos por Administración, previo a la emisión del acto de otorgamiento de la buena pro, se puede valorar que la voluntad se encuentra influenciada por factores ajenos que distorsionaron la declaración, existiendo conocimiento por la otra parte durante dicho proceso.

2. Se determinó la existencia de conflicto legal entre el Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, respecto a las disposiciones en los procedimientos de selección con sistema de precios unitarios, los documentos que regulan el procedimiento, el Manual de Usuario para Proveedores del Estado, la Directiva N° 006-2019-OSCE/CD y los efectos de indicaciones del SEACE, al inferirse en este último sin estar claramente expresado y en contraposición por el reglamento que en el proceso de mejora se registra del precio total y no el unitario . En ese sentido, si la Entidad otorgó la buena pro al postor que presentó como mejora el precio unitario influenciado por la disposición establecida por el reglamento corresponde eximir de responsabilidad al postor e inaplicar la infracción administrativa, al calificar dicha conducta en un error de derecho que justificaba la anulabilidad del acto, la cual era esencial y conocible.

3. En la subasta inversa electrónica con sistema de precios unitarios, el postor que consigna el precio unitario en lugar del precio total por error involuntario, toda vez que es una conducta que resulta calificable como infracción administrativa en la Ley de Contrataciones del Estado, pues dicha conducta no se subsume con ningún tipo de infracción, asimismo, resulta atentatorio contra el principio de tipicidad el término “injustificadamente”, al ser genérico e indeterminable y no se puede aplicar de manera extensiva ni por analogía determinadas conductas a simple discreción se la autoridad administrativa.

VI. RECOMENDACIONES

1. En los procedimientos de selección por subasta inversa electrónica donde se presenten casos de una mejora de precio desproporcionalmente inferior en comparación a los demás competidores y al valor referencial, la Administración Pública, previa a tomar una decisión, debe examinar los hechos facticos a fin de comprobar realmente que no exista alguna distorsión en la voluntad del declarante que posteriormente perjudique económicamente y vulnere los principios de equidad, transparencia, eficiencia y eficacia de la Ley N° 30225, así como el principio de buena fe de las partes en la formación de un contrato.
2. Se debe desarrollar una mejor regulación respecto al procedimiento de selección por subasta inversa electrónica, los sistemas de contratación, los documentos normativos y el SEACE, a fin de evitar desincentivar la participación de proveedores por implicancia de las interpretaciones jurídicas que no se desarrollan adecuadamente y perjudican a los proveedores, asimismo se debe permitir a la para la satisfacción de las necesidades eficientemente mecanismos que en caso de un desistimiento se culmine el plazo de perfeccionamiento y se realice la invitación al segundo postor inmediatamente.
3. Las conductas sancionables deben estar debidamente definidas en la Ley de Contrataciones del Estado y de ser posible en el Reglamento, de modo tal que no implique interpretaciones extensivas o discrecionales al órgano sancionador, pues el elemento constitutivo denominado “injustificado” o que no se haya previsto el error o dolo en la formación de las ofertas como conducta sancionable no dota consistencia a un régimen sancionador conforme a derecho, pues vulnera el principio de tipicidad al tenerse que usar tipos genéricos y extensivos, llevando a sancionador los hechos y no las conductas.

REFERENCIAS

- Abreu, J. L. (2014). El Método de la Investigación. Research Method. *Daena: International Journal of Good Conscience*, 9(3), 195-204. [http://www.spentamexico.org/v9-n3/A17.9\(3\)195-204.pdf](http://www.spentamexico.org/v9-n3/A17.9(3)195-204.pdf)
- Alejos, G. O. (17 febrero de 2019). *El procedimiento administrativo electrónico: El caso particular del procedimiento de selección de contratistas*. TIDA <https://tidaunmsm.com/articulos/procedimiento-administrativo-electronico-caso-particular-seleccion-de-contratist>
- Amazo, P. D. (2007). ¿Es paradójica la autonomía de la voluntad frente al principio de legalidad en los contratos estatales? *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, 9 (2), 181-203. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73390208>
- Armas, M. C. (2002). *Sistemas de contratación por medios electrónicos: manifestación de la voluntad y perfeccionamiento contractual*. [Tesis de posgrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos] https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/Armas_M_C/Armas_M_C.htm
- Bramont-Arias, T. L. (1997). El Error en el Derecho Penal. *Derecho & Sociedad*, (12), 125-136. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/16677/17009>
- Briones, G. (1995). *La investigación social y educativa*. Bogota: Convenio Andrés Bello.
- Caro, L. (s.f.). *7 técnicas e instrumentos para la recolección de datos*. Recuperado de: <https://www.lifeder.com/tecnicas-instrumentos-recoleccion-datos/>
- Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación. (9 de setiembre de 2019). *Diferencia entre la Investigación Básica y la Aplicada*. <http://www.duoc.cl/biblioteca/crai/diferencia-entre-la-investigacion-basica-y-la-aplicada>.
- Chamorro, I. W. (2019). *Análisis jurídico sobre la subasta inversa electrónica en el proceso de contratación pública*. [Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. <https://dspace.pucesi.edu.ec/handle/11010/332>
- Chaparro, D. D. y Cortez Tataje, J. (2020). *Procedimiento sancionador en las contrataciones del estado y su adhesión al régimen sancionador del procedimiento administrativo general, Lima 2020*. [Tesis de Pregrado, Universidad de San Martín de Porres]. <https://hdl.handle.net/20.500.12727/7713>
- Cieza, M. J. (2015). Error y responsabilidad precontractual. *Gaceta Civil & Procesal Civil*, (22), 68-134. <https://ciezaabogados.com/error-y-responsabilidad-precontractual/>
- Colachagua, V. C. (2019). *La nulidad como figura jurídica para sanear irregularidades durante el proceso de selección en la ley de contrataciones del estado, análisis de la resolución 3059-2016-TCE-S2*. [Tesis de Pregrado, Universidad de Inca Garcilaso de la Vega]. <http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/5039>

- Contreras, M. Y. (2017). *Las sanciones administrativas en las contrataciones públicas: Un estudio comparativo de Perú, Chile, Colombia y México*. [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional del Altiplano]. <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/6847>
- Cossío, C. M. (2009). *Estudio comparativo de la subasta inversa electrónica en el Perú, los Estados Unidos y la Comunidad Europea* [Tesis de Pregrado, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. <http://hdl.handle.net/10757/273841>
- Danós, O. J. (2007). La Impugnación de los Actos de Trámite en el Procedimiento Administrativo y la Queja. *Derecho & Sociedad*, (28), 267-271. Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17237>
- Frutos, V. D. (2016). *Evaluación de la transparencia y no discrecionalidad en los procesos de subasta inversa en el gobierno autónomo descentralizado municipio de mocha*. [Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. <https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/1664>
- García, A. C. (1993). Análisis documental: el análisis formal. *Revista general de información y documentación*, 3(1), 11. <https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/download/RGID9393120011A/11739>
- Garrido, F. F. (1950). El negocio jurídico del particular en el derecho administrativo. *Revista de administración pública*, (1), 117-130. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2111795>
- Giraldo, P. M. (2011). Abordaje de la Investigación Cualitativa a través de la Teoría Fundamentada en los Datos. *Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias*, II (6), 79-86. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=215021914006>
- Godínez, V. L. (2013). *Métodos, técnicas e instrumentos de investigación*. Lima, Perú.
- Gomez, R. M. (2019). *El Problema de la delimitación normativa del Impedimento para contratar con el Estado referido a la conformación del "GRUPO ECONÓMICO" para el cumplimiento del estándar de Tipicidad de la infracción del literal c), numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE)*. [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/16323>
- González, B., P. (2019). Error evidente, culpa y tipicidad en las infracciones aduaneras. *Revista De Derecho*, (20), 91-157. <https://doi.org/10.22235/rd.vi20.1873>
- Gordillo, A. A. (2013). *Tratado de derecho administrativo y obras selectas*. (1ª ed., Vol. 8) Aires: Fundación de Derecho Administrativo. <https://www.gordillo.com/tomo8.php>
- Hamodi, C., López, V. M., & López, P. A. (2015). Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación superior. *Perfiles educativos*, 37(147), 146-161.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982015000100009&lng=es&tlng=es

- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (2014). Selección de la muestra. *En Metodología de la Investigación* (6ª ed., pp. 170-191). México: McGraw-Hill.
- Hurtado, J. (2001). *El proyecto de investigación*. Bogotá: Fundación Sypal, Magistrado.
- Jorge, C. P. (9 de setiembre 2019). *La motivación del acto administrativo como medio de control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales*. Recuperado el 9 de setiembre de 2020, sitio web de Universidad de Buenos Aires: <http://www.derecho.uba.ar/docentes/pdf/el-control-de-la-actividad-estatal/cae-coviello-motivacion.pdf>
- Martínez, R. M. (2014). *El error vicio del conocimiento*. [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Comillas]. <http://hdl.handle.net/11531/510>
- Marroquin, M., F. (2006). *Supresión de la simulación como vicio del consentimiento en nuestro código civil Decreto Ley número 106*. [Tesis de pregrado, Universidad San Carlos de Guatemala] http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_6495.pdf
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico Perú (2017), *Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador*. (3ª ed.). Perú: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. <https://normas-apa.org/referencias/citar-libro/>
- Modesto Montoya. (8 de setiembre de 2019). *Relación entre investigación básica e investigación aplicada*. [Archivo de Vídeo]. <https://www.youtube.com/watch?v=-ZozXgmHojc>
- Muñoz, C. R. (2017). *La nulidad y sus efectos: causales del Tribunal de Contratación Pública para negar la retroactividad*. [Tesis de Pregrado, Universidad de Chile]. <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/146293>
- Ocampo, V. F. (2011). *El principio de razonabilidad como límite a la tipificación reglamentaria de los organismos reguladores*. IUS ET VERITAS, 21(42), 290-304. Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12094>
- Ponce de León, A. L. (9 de setiembre 2019). *La metodología de la investigación científica del Derecho*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/24.pdf>
- Ramírez, T. (2010). *Como hacer un proyecto de investigación*. Caracas: Panapo.
- Ramos, A. G. (2018). *La fase de programación y su impacto en la ejecución del plan anual de contrataciones en la Municipalidad Provincial de Puno periodo 2016*. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/6339>
- Reyes, S. E. (2017). *El proceso administrativo y su incidencia en las adquisiciones de las subastas inversas electrónicas de compras públicas en el hospital del día iess, año 2015*. [Tesis de Pregrado, Universidad Estatal del Sur De Manabí] <http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1037>

- Risco, S. M. (19 de setiembre 2019). *¿Cómo se configuran el error de tipo y el error de prohibición?* IUSLATIN. <https://iuslatin.pe/como-se-configuran-el-error-de-tipo-y-el-error-de-prohibicion/>.
- Rojas, C. M. (2015). Tipos de Investigación científica: Una simplificación de la complicada incoherente nomenclatura y clasificación. *REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria*, 16 (1), 1-14. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63638739004>.
- Rubio, S. C. (11 de noviembre 2019). *El otorgamiento de la buena pro en las contrataciones estatales*. Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. OSCE. <http://www.osce.gob.pe/consucode/userfiles/image/otorga.pdf>
- Ruíz, J. (Metodología de la investigación cualitativa.). 1996. Nueva York.: Facultad de Sociología de la Universidad de Deusto, N.Y.
- Salazar, Ch. R. (2009). Las Formas Jurídicas Administrativas y la Contratación Pública sobre Bienes, Servicios y Obras. *Círculo de Derecho Administrativo* (7), 24-35. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/14011>
- Silva, M. (2013). *Guía de Metodología de la investigación*. Trujillo: Oficina de Investigación.
- Socías, C. J. (2002). *Error material, error de hecho y error de derecho. Concepto y mecanismos de corrección*. Revista de administración pública, (157), 157-2014. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=246395>
- Terrones, J. J. y Castillo Andía, G. (2020). El régimen sancionador en las contrataciones con el Estado en contraposición a las garantías mínimas previstas en el régimen sancionador contemplado en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. *Derecho & Sociedad*, 2(54), 195-207. Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/22443>
- Torres, M. M. y Varsi, R. E. (2015). 2+ 2= 5 El error de cálculo y error de cantidad en el negocio jurídico. *Dialogo con la jurisprudencia*, 20(200), 74-79. <https://works.bepress.com/marcoandreitorresmaldonado/17/>
- Torres, P. I. y Salazar, S. C. (11 de setiembre 2019), *Vicios Del Consentimiento*. Corporación de Estudios y Publicaciones. <https://www.derechoecuador.com/vicios-del-consentimiento>.
- Torres, P. P. (2015). *Análisis jurídico propositivo de las exoneraciones de servicios de publicidad en los procesos de contrataciones del Estado Peruano, año fiscal 2014*. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/2226>
- Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (9 de setiembre de 2019). *La investigación cualitativa*. <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n3/e2.html#nota01>

ANEXOS

ANEXO 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO	
El vicio de la voluntad en la oferta frente a la inaplicación de infracción administrativa, en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, Lima 2020	
CATEGORIZACIÓN	Categoría 1: Vicio de la Voluntad Sub categoría 1: Error de Hecho Sub categoría 2: Error de Derecho Categoría 2: Infracción Administrativa Sub categoría 1: Principio de Razonabilidad Sub categoría 2: Principio de Tipicidad
PROBLEMAS	
Problema General	¿De qué manera vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020?
Problema Especifico 1	¿Cuál es efecto de la aplicación del principio de razonabilidad de la sanción frente al error de derecho en la declaración de oferta?
Problema Especifico 2	¿Cuál es el efecto del error de hecho del proveedor frente a la sanción basada en el principio de tipicidad?
OBJETIVOS	
Objetivo General	Analizar de qué manera el vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa, en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020.
Objetivo Especifico 1	Determinar efecto de la aplicación del principio de razonabilidad de la sanción frente al error de derecho en la declaración de oferta.
Objetivo Especifico 2	Identificar cuál es el efecto del error de hecho del proveedor frente a la sanción basada en el principio de tipicidad.
SUPUESTOS	

Supuesto General	El vicio de la voluntad en la subasta inversa electrónica incide en la aplicación como infracción administrativa por el Tribunal de Contrataciones del Estado, en Lima. Porque las disposiciones que establece el reglamento y las reglas del SEACE establecido por OSCE lo inducen a error, pues lo faculta a proponer precios unitarios.
Supuesto Especifico 1	El error de derecho del postor en la subasta inversa electrónica incide la aplicación del principio de razonabilidad por el TCE. Porque el postor cumple con registrar el precio unitario y continua en el proceso porque el sistema le permite por ende se le otorga la buena pro.
Supuesto Especifico 2	El error de hecho del postor en la subasta inversa electrónica incide en la sanción basado en el principio de tipicidad por el TCE, en función a la Ley N° 27444. Porque al ser ganador de la buena pro se genera la obligación de contratar con la Entidad, y en su incumplimiento al no estar de acuerdo con el precio el postor es sancionado por el TCE basado en le Ley N° 27444.
METODO	
Diseño de investigación	<ul style="list-style-type: none"> • Enfoque: Cualitativa • Diseño: Teoría Fundamentada • Tipo de investigación: Básica • Nivel de la investigación: Descripción
Método de muestreo	<ul style="list-style-type: none"> • Población: Profesionales abogados del Sector Público y Privado especializados en contrataciones públicas que tuvieron participación en procedimientos de selección de subasta inversa electrónica. • Muestra: 6 especialistas.
Plan de análisis y trayectoria metodológica	<ul style="list-style-type: none"> • Técnica e instrumento de recolección de datos • Técnica: Entrevista y análisis de documentos. • Instrumento: Guía de entrevista y guía de análisis documental

ANEXO 2
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
GUÍA DE ENTREVISTA

TÍTULO:

El vicio de la voluntad en la oferta frente a la inaplicación de infracción administrativa, en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, Lima 2020.

INDICACIONES: El presente instrumento tiene como propósito recaudar su opinión respecto a las infracciones a proveedores que presentan ofertas desproporcionalmente bajas en procedimientos de subasta inversa electrónica, motivo por el cual se le pide responder las siguientes preguntas con la mayor seriedad y compromiso.

Entrevistado/a :
Cargo :
Institución :

OBJETIVO GENERAL

Analizar de qué manera el vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa, en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima

Preguntas:

1. En su opinión ¿Considera usted que, para la validez de una oferta es relevante el discernimiento de la voluntad del proveedor, al tenerse como mejora un precio exorbitantemente inferior en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica?

2. En su criterio ¿Por qué un proveedor que declaró como mejora un precio por debajo del 95% menor del valor referencial en una subasta

inversa electrónica, en evidente perjuicio patrimonial para él, resultaría amparable legalmente inaplicar la infracción que constituye el incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad?

- 3. ¿Está usted de acuerdo que el TCE considere, en evidente desproporción de una mejora de precio en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica, al error como factor ajeno a la voluntad del infractor?**

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Determinar efecto de la aplicación del principio de razonabilidad de la sanción frente al error de derecho en la declaración de oferta

Preguntas:

- 4. ¿Cree usted que, de declararse ganador a un proveedor por establecerse en el proceso de Mejora de Precio del SEACE una indicación contraria a lo dispuesto al Reglamento de la Ley N° 30225, perjudicaría o beneficiaría al proveedor en el cumplimiento del perfeccionamiento contractual con la Entidad?**

5. ¿Considera usted que resulta evidente detectar el riesgo de incumplimiento de la obligación de contratar del proveedor, cuando la mejora de precio difiere exorbitantemente de sus demás competidores, en un precio 95% menor del valor referencial, en la subasta inversa electrónica?

6. ¿Cree usted que es incorrecto e ineficiente que la Entidad deba esperar el plazo de la obligación de contratar con el proveedor, habiendo este advertido en la misma fecha y después del otorgamiento de la buena pro el error involuntario en la mejora del precio de su oferta en el procedimiento en la subasta inversa electrónica?

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Identificar cuál es el efecto del error de hecho del proveedor frente a la sanción basada en el principio de tipicidad.

Preguntas:

7. En su opinión ¿Cree usted que los defectos en la voluntad del proveedor, como el error, durante el procedimiento de selección de una subasta inversa electrónica son calificables como infracción administrativa, de acuerdo a la Ley N° 30225?

8. ¿Está usted de acuerdo en que, registrar una oferta económica desproporcionalmente baja para luego incumplir la obligación de contratar con la Entidad debe ser calificable como infracción administrativa?

9. En su opinión ¿Considera usted que, para el TCE prevalece más el hecho sobre la conducta, al calificar al proveedor con una infracción administrativa por incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad derivado de una oferta económica desproporcionalmente baja en un procedimiento de subasta inversa electrónica?

SELLO		FIRMA	

ANÁLISIS DOCUMENTAL

AUTOR:

FECHA:

FUENTE DOCUMENTAL	CONTENIDO DE LA FUENTE A ANALIZAR	ANÁLISIS DEL CONTENIDO	CONCLUSIÓN

ANEXO 5



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: LA TORRE GUERRERO LUGA FERNANDA
 1.2. Cargo e institución donde labora: UCV LIMA NORTE
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUIA DE ENTREVISTA
 1.4. Autor(A) de instrumento: HUBERTO PORTOCARRERO CANCHORI

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 28 de Noviembre del 2020

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 980158941 Tel. 980158941



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: ACE TO LUCA
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUIA DE ENTREVISTA
 1.4. Autor(A) de Instrumento: HUMBERTO PORRECARRENO CASHIM

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												X	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												X	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												X	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos												X	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

X

98 %

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

Lima, 21 DE DICIEMBRE del 2020

Humberto Porrecarreño
 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE
 DNI No. 81334055 Telf.: 933399274

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: LUDENS GONZALEZ GERARDO FRANCISCO
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUIA DE ENTREVISTA
 1.4. Autor(A) de Instrumento: HUBERTO ADAPOLINERO CANCHAM

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

X

95 %

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

Lima, 21 DICIEMBRE del 2020


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE
 DNI No. 88888888 Telf. 99999999

ANEXO 6

GUÍA DE ENTREVISTA

TÍTULO:

El vicio de la voluntad en la oferta frente a la inaplicación de infracción administrativa, en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, Lima 2020.

INDICACIONES: El presente instrumento tiene como propósito recaudar su opinión respecto a las infracciones a proveedores que presentan ofertas desproporcionalmente bajas en procedimientos de subasta inversa electrónica, motivo por el cual se le pide responder las siguientes preguntas con la mayor seriedad y compromiso.

Entrevistado/a : Lourdes Emelyn, Zelaya Minaya
Grado Académico : Abogada
Cargo : Especialista en Contrataciones Públicas -MTC

OBJETIVO GENERAL

Analizar de qué manera el vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa, en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima

Preguntas:

1. En su opinión ¿Considera usted que, para la validez de una oferta es relevante el discernimiento de la voluntad del proveedor, al tenerse como mejora un precio exorbitantemente inferior en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica?

Para conseguir la satisfacción de la necesidad publica es necesario que las partes expresen la voluntad de contratar, en ese sentido es importante la voluntad del postor a contratar para ello la normativa ha precisado los requisitos necesarios para que la propuesta realizada sea valida

2. En su criterio ¿Por qué un proveedor que declaró como mejora un precio por debajo del 95% menor del valor referencial en una subasta inversa electrónica, en evidente perjuicio patrimonial para él, resultaría

amparable legalmente inaplicar la infracción que constituye el incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad?

No necesariamente el presentar una propuesta por debajo del 95% durante el periodo de puja demostraría un perjuicio económico hacia el postor ya que también existen otros factores internos y externos que podrían tener incidencia en la propuesta económica (caída del precio internacional, exceso de mercadería entre otros).

3. ¿Está usted de acuerdo que el TCE considere, en evidente desproporción de una mejora de precio en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica, al error como factor ajeno a la voluntad del infractor?

Los participantes postores y contratistas deben de ser diligentes durante las etapas de la contratación pública por lo quedan de ser responsables de sus actuaciones ya que ponen en riesgo el cumplimiento de la finalidad pública, en ese sentido de existir un error cometido durante el periodo de lances el contratista **debe de honrar lo expresado durante la referida etapa.**

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Determinar efecto de la aplicación del principio de razonabilidad de la sanción frente al error de derecho en la declaración de oferta

Preguntas:

4. ¿Cree usted que, de declararse ganador a un proveedor por establecerse en el proceso de Mejora de Precio del SEACE una indicación contraria a lo dispuesto al Reglamento de la Ley N° 30225, perjudicaría o beneficiaría al proveedor en el cumplimiento del perfeccionamiento contractual con la Entidad?

El SEACE tiene carácter legal toda vez que la información que se registra en esta debe de estar enmarcada en la normativa de contrataciones por lo que de existir alguna discrepancia entre el sistema y la norma que lo regula se estaría vulnerando los principios que rigen las contrataciones de estado.

5. ¿Considera usted que resulta evidente detectar el riesgo de incumplimiento de la obligación de contratar del proveedor, cuando la mejora de precio difiere exorbitantemente de sus demás competidores, en un precio 95% menor del valor referencial, en la subasta inversa electrónica?

Si es posible presumir un riesgo de incumplimiento.

6. ¿Cree usted que es incorrecto e ineficiente que la Entidad deba esperar el plazo de la obligación de contratar con el proveedor, habiendo este advertido en la misma fecha y después del otorgamiento de la buena pro el error involuntario en la mejora del precio de su oferta en el procedimiento en la subasta inversa electrónica?

No es incorrecto toda vez que no se puede saber con exactitud si la reducción en la propuesta económica luego del periodo de lances obedece a un error u a otra situación del mercado.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Identificar cuál es el efecto del error de hecho del proveedor frente a la sanción basada en el principio de tipicidad.

Preguntas:

7. En su opinión ¿Cree usted que los defectos en la voluntad del proveedor, como el error, durante el procedimiento de selección de una subasta inversa electrónica son calificables como infracción administrativa, de acuerdo a la Ley N° 30225?

Si, toda vez que incumplen con actuar diligentemente durante una de las etapas de la contratación.

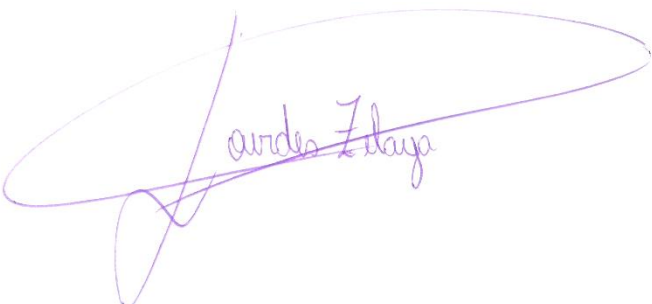
8. ¿Está usted de acuerdo en que, registrar una oferta económica desproporcionalmente baja para luego incumplir la obligación de

contratar con la Entidad debe ser calificable como infracción administrativa?

Si.

9. En su opinión ¿Considera usted que, para el TCE prevalece más el hecho sobre la conducta, al calificar al proveedor con una infracción administrativa por incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad derivado de una oferta económica desproporcionalmente baja en un procedimiento de subasta inversa electrónica?

Considero que para el tribunal prevalece el hecho toda vez que es verificable a diferencia de la conducta.

SELLO	FIRMA
Lourdes Emelyn, Zelaya Minaya 59324	

GUÍA DE ENTREVISTA

TÍTULO:

El vicio de la voluntad en la oferta frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020.

INDICACIONES: El presente instrumento tiene como propósito recaudar su opinión respecto a las infracciones a proveedores que presentan ofertas desproporcionalmente bajas en procedimientos de subasta inversa electrónica, motivo por el cual se le pide responder las siguientes preguntas con la mayor seriedad y compromiso.

Entrevistado/a : Ernesto La Puente Ronceros
Institución : CPI LEGAL
Institución : Socio

OBJETIVO GENERAL

Analizar de qué manera el vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa, en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima.

Preguntas:

- 1. En su opinión ¿Considera usted que, para la validez de una oferta es relevante el discernimiento de la voluntad del proveedor, al tenerse como mejora un precio exorbitantemente inferior en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica?**

Considero que, salvo se trate de dolo, no existiría vicio de la voluntad por error en estos casos. No conozco ningún caso en el cual un participante de un procedimiento de subasta inversa electrónica realice sus pujas y ofertas ignorando que los precios que propone le resultan lesivos. Cada oferente hace su propio análisis costo – beneficio al momento de participar, ofertar y pujar. Si es evidente el detrimento patrimonial del propio participante o postor por su propia cuenta, entonces hablaríamos de dolo, pues no hay desconocimiento

o error en cuanto propone los precios sabiendo muy bien cuál debe ser su rentabilidad esperada en el negocio.

2. En su criterio ¿Por qué un proveedor que declaró como mejora un precio por debajo del 95% menor del valor referencial en una subasta inversa electrónica, en evidente perjuicio patrimonial para él, resultaría amparable legalmente inaplicar la infracción que constituye el incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad?

Definitivamente esto debería ser pasible de sanción administrativa por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, puesto que presentar ese tipo de ofertas que no son serias, claramente tuvieron el propósito de adjudicarse la Buena Pro, sin intenciones reales de perfeccionar y ejecutar el contrato, pues ello no le resultaría rentable. Si esto es así, debería ser pasible de sanción administrativa, considero en principio, de multa e inhabilitación temporal para contratar con el Estado como medida cautelar, hasta que pague la multa.

3.¿Está usted de acuerdo que el TCE considere, en evidente desproporción de una mejora de precio en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica, al error como factor ajeno a la voluntad del infractor?

No estoy de acuerdo. La figura del error no cabe en estos casos, pues el infractor claramente es un agente del mercado que pertenece a determinado rubro y conoce muy bien los precios de dicho mercado, sabiendo perfectamente que el monto que está ofertando le beneficia o le perjudica.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Determinar efecto de la aplicación del principio de razonabilidad de la sanción frente al error de derecho en la declaración de oferta

- 4. ¿Cree usted que, de declararse ganador a un proveedor por establecerse en el proceso de Mejora de Precio del SEACE una indicación contraria a lo dispuesto al Reglamento de la Ley N° 30225, perjudicaría o beneficiaría al proveedor en el cumplimiento del perfeccionamiento contractual con la Entidad?**

Considero que lo perjudica. Si en el proceso de mejora de precios que obra en el SEACE existe una disposición contraria al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aquello configura una causal o vicio de nulidad de aquel acto, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa en que se cometió tal vicio, a fin de corregirlo.

Esta consecuencia perjudica al postor adjudicatario de la Buena Pro, quien por esa razón no podrá suscribir el contrato, ya que esta declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección debe realizarse antes del perfeccionamiento del contrato y una vez advertido el vicio.

- 5. ¿Considera usted que resulta evidente detectar el riesgo de incumplimiento de la obligación de contratar del proveedor, cuando su mejora de precio difiere exorbitantemente de sus demás competidores, en un precio 95% menor del valor referencial, en la subasta inversa electrónica?**

Evidentemente, la Entidad realizó como parte de los actos preparatorios una Indagación de Mercado y la misma arrojó el valor referencial, por ello, resulta por demás sospechoso que un postor oferte cantidades tan abismalmente menores, que a las claras no serían serias y evidencian el riesgo de no poder suscribir el contrato con aquel proveedor, lo que genera la no satisfacción de las necesidades institucionales, el incumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional y de la finalidad pública.

- 6. ¿Cree usted que es incorrecto e ineficiente que la Entidad deba esperar el plazo de la obligación de contratar con el proveedor, habiendo este advertido en la misma fecha y después del otorgamiento de la buena pro**

el error involuntario en la mejora del precio de su oferta en el procedimiento en la subasta inversa electrónica?

Desde luego, es ineficiente esperar a ello. La Entidad realizó la Indagación de Mercado y conoce muy bien el valor referencial que se ha establecido como resultado de dicha indagación entre los potenciales proveedores, lo que ya debería generar la alerta y el inicio de las acciones inmediatas. Sin embargo, bajo el marco legal actual, es derecho del adjudicatario esperar el plazo legal para el perfeccionamiento del contrato, por lo que no podría accionarse antes. Siendo ello así, debería proponerse un cambio normativo que pueda prever esta clase de supuestos e iniciar acciones de pérdida de la Buena Pro y denuncia ante del Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Identificar cuál es el efecto del error de hecho del proveedor frente a la sanción basada en el principio de tipicidad.

Preguntas:

- 7. En su opinión ¿Cree usted que los defectos en el discernimiento de la voluntad del proveedor, como el error, durante el procedimiento de selección de una subasta inversa electrónica son calificables como infracción administrativa, de acuerdo a la Ley N° 30225?**

En mi opinión no cabe el error en estos casos, pues el postor conoce perfectamente el mercado y las reglas definitivas del procedimiento de selección cuando participa y oferta. En consecuencia, se trataría de dolo y ello debería ser tipificado como infracción y pasible de sanción administrativa.

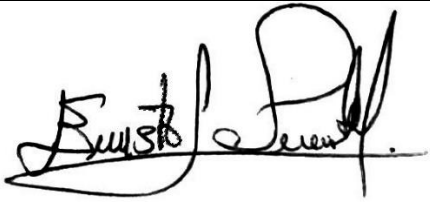
- 8. ¿Está usted de acuerdo en que, registrar una oferta económica desproporcionalmente baja para luego incumplir la obligación de contratar con la Entidad debe ser calificable como infracción administrativa?**

Por supuesto. Ese tipo de conductas no deberían ser amparadas por el Derecho y deberían estar incluidas en el régimen sancionador. La potestad

sancionadora del Tribunal de Contrataciones del Estado debería contemplar estos supuestos también y sancionar como corresponde.

9. En su opinión ¿Considera usted que, para el TCE prevalece más el hecho sobre la conducta, al calificar al proveedor con una infracción administrativa por incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad derivado de una oferta económica desproporcionalmente baja en un procedimiento de subasta inversa electrónica?

Conocí de un caso en el cual ocurrió exactamente ello, pero en un procedimiento clásico de Adjudicación Simplificada. El adjudicatario no perfeccionó el contrato y perdió la Buena Pro. En el procedimiento administrativo sancionador, el adjudicatario alegó error y el Tribunal le aplicó la sanción de multa con medida cautelar de inhabilitación temporal para contratar con el Estado. Para el TCE, es un hecho objetivo el no haber perfeccionado el contrato, restando solo por determinar si dicha omisión fue justificada, injustificada o si existió alguna imposibilidad física o jurídica que le impidiera perfeccionar el contrato. Si fue justificada o si el TCE determina que existió tal imposibilidad física o jurídica, no hay infracción y no se sanciona, pero para el TCE no tiene cabida el error cuando se trata de esta infracción.

SELLO	FIRMA
Ernesto La Puente Ronceros Colegio de Abogados del Callao N° 8137	

GUÍA DE ENTREVISTA

TÍTULO:

El vicio de la voluntad en la oferta frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020.

INDICACIONES: El presente instrumento tiene como propósito recaudar su opinión respecto a las infracciones a proveedores que presentan ofertas desproporcionalmente bajas en procedimientos de subasta inversa electrónica, motivo por el cual se le pide responder las siguientes preguntas con la mayor seriedad y compromiso.

Entrevistado/a : Pajuelo Quineche Cesar Gustavo

Cargo : Asistente legal

Institución : Grupo Konecta

OBJETIVO GENERAL

Analizar de qué manera el vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020.

Preguntas:

- 1. En su opinión ¿Considera usted que, para la validez de una oferta es relevante el discernimiento de la voluntad del proveedor, al tenerse como mejora un precio exorbitantemente inferior en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica?**

Teniendo en cuenta que la oferta es la manifestación de la voluntad que hace el proveedor de querer contratar con el estado y que en muchas infracciones detectadas por el tribunal van orientadas al no perfeccionamiento del contrato, en donde se sanciona la contradicción en la incurre el proveedor al no cumplir con plasmar en un contrato su manifestación de voluntad de proveer bienes o servicios.

- 2. En su criterio ¿Por qué un proveedor que declaró como mejora un precio por debajo del 95% menor del valor referencial en una subasta inversa**

electrónica, en evidente perjuicio patrimonial para él, resultaría amparable legalmente inaplicar la infracción que constituye el incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad?

Porque en realidad, no solo se debe a la sola decisión del proveedor, hay factores externos como la fluctuación de precios en los insumos, que afectan indirectamente el monto de una oferta.

3.¿Está usted de acuerdo que el TCE considere, en evidente desproporción de una mejora de precio en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica, al error como factor ajeno a la voluntad del infractor?

No lo comparto el criterio ya que el error debe ser el resultado de una conjunción de factores externos que conllevaron a que el proveedor a ofertar de manera errónea, ahora en una subasta inversa electrónica es difícil cometer un error de ese tipo.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Determinar efecto de la aplicación del principio de razonabilidad de la sanción frente al error de derecho en la declaración de oferta.

Preguntas:

4. ¿Cree usted que, de declararse ganador a un proveedor por establecerse en el proceso de Mejora de Precio del SEACE una indicación contraria a lo dispuesto al Reglamento de la Ley N° 30225, perjudicaría o beneficiaría al proveedor en el cumplimiento del perfeccionamiento contractual con la Entidad?

Pienso que mejora, ya que el Reglamento de la Ley de Contrataciones como todo manual regula de manera general, sin embargo, no puede regular casos concretos en donde ni el postor, ni la entidad tienen claro cómo interpretar la norma para casos específicos y concretos, hecho que si puede hacer el SEACE, ya que lo que busca es justo tapar dichos vacíos.

5. ¿Considera usted que resulta evidente detectar el riesgo de incumplimiento de la obligación de contratar del proveedor, cuando su mejora de precio difiere exorbitantemente de sus demás competidores, en un precio 95% menor del valor referencial, en la subasta inversa electrónica?

Si es evidente que se detecte el riesgo de incumplimiento ya que no alcanzaría a satisfacer la necesidad de adquisición de bienes o servicios por parte de entidad.

6. ¿Cree usted que es incorrecto e ineficiente que la Entidad deba esperar el plazo de la obligación de contratar con el proveedor, habiendo este advertido en la misma fecha y después del otorgamiento de la buena pro el error involuntario en la mejora del precio de su oferta en el procedimiento en la subasta inversa electrónica?

Es correcto el esperar ya que en todo proceso de selección existen plazos mínimos, que son necesarios para que el comité de selección pueda declarar un error de cálculo, lo cual garantiza un debido proceso.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Identificar cuál es el efecto del error de hecho del proveedor frente a la sanción basada en el principio de tipicidad.

Preguntas:

7. En su opinión ¿Cree usted que los defectos en el discernimiento de la voluntad del proveedor, como el error, durante el procedimiento de selección de una subasta inversa electrónica son calificables como infracción administrativa, de acuerdo a la Ley N° 30225?

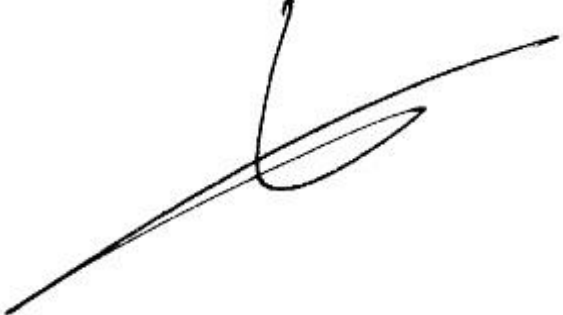
Si, toda vez que incumplen con actuar diligentemente durante una de las etapas de la contratación.

8. ¿Está usted de acuerdo en que, registrar una oferta económica desproporcionalmente baja para luego incumplir la obligación de contratar con la Entidad debe ser calificable como infracción administrativa?

Si, pues hay una intención dolosa en el accionar del proveedor, de lo cual debe ser sancionada.

9. En su opinión ¿Considera usted que, para el TCE prevalece más el hecho sobre la conducta, al calificar al proveedor con una infracción administrativa por incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad derivado de una oferta económica desproporcionalmente baja en un procedimiento de subasta inversa electrónica?

Considero que si ya que la conducta es un ello más subjetivo y el tribunal de contrataciones al ser un órgano administrativo se basa a hechos concretos que aterrizan en los documentos presentados.

SELLO	FIRMA
Pajuelo Quineche Cesar Gustavo Colegio de Abogados de Huaura N° 1084	

GUÍA DE ENTREVISTA

TÍTULO:

El vicio de la voluntad en la oferta frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020.

INDICACIONES: El presente instrumento tiene como propósito recaudar su opinión respecto a las infracciones a proveedores que presentan ofertas desproporcionalmente bajas en procedimientos de subasta inversa electrónica, motivo por el cual se le pide responder las siguientes preguntas con la mayor seriedad y compromiso.

Entrevistado/a : Lorena Murrieta Tochon
Cargo : Abogada del Área de Logística
Institución : COPESCO-MINCETUR

OBJETIVO GENERAL

Analizar de qué manera el vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020.

Preguntas:

- 1. En su opinión ¿Considera usted que, para la validez de una oferta es relevante el discernimiento de la voluntad del proveedor, al tenerse como mejora un precio exorbitantemente inferior en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica?**
Es normal que los proveedores al momento de presentarse como tales deben basarse en las reglas del procedimiento, para ofertar sus precios y respecto al valor inferior este debería precisar límites al precio por el valor referencial total de los servicios o productos.
- 2. En su criterio ¿Por qué un proveedor que declaró como mejora un precio por debajo del 95% menor del valor referencial en una subasta inversa electrónica, en evidente perjuicio patrimonial para él, resultaría amparable legalmente inaplicar la infracción que constituye el incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad?**

El proveedor tiene el marco legal para poder ofertar basándose en diferentes indicadores, por lo que la subasta inversa le permite, al colocar un precio unitario y no por el volumen y es aceptado esto implica que el proveedor oferta y el estado a través de las Instituciones acepta y ese error no lo puede asumir el Proveedor.

3. ¿Está usted de acuerdo que el TCE considere, en evidente desproporción de una mejora de precio en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica, al error como factor ajeno a la voluntad del infractor?

El proveedor solo se basa en la información proporcionada por las instituciones y en el caso de la subasta inversa electrónica el valor referencial es por el precio unitario y si la OSCE o cualquier oficina que diseña el proceso deberá asumir su responsabilidad administrativa debido a que el proveedor ha sido elegido por haber señalado el precio unitario y no del precio por el volumen, error en el proceso que debe ser asumido por el Estado a través de sus instituciones.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Determinar efecto de la aplicación del principio de razonabilidad de la sanción frente al error de derecho en la declaración de oferta.

Preguntas:

¿Cree usted que, de declararse ganador a un proveedor por establecerse en el proceso de Mejora de Precio del SEACE una indicación contraria a lo dispuesto al Reglamento de la Ley N° 30225, perjudicaría o beneficiaría al proveedor en el cumplimiento del perfeccionamiento contractual con la Entidad?

Si hablamos de beneficio del proveedor es normal que al participar esté dentro de los posibles ganadores, basado justamente en el precio de los productos y si tiene la oportunidad de seguir bajando unos puntos y el sistema

le permite, tiene el derecho de ofertar a menos precio. Esta situación no debe dejar en desventaja a otro proveedor. El tema es que al ser ganador de la buena pro basado en el precio unitario la institución no puede alegar que el precio es por el total o volumen, por lo que el Proveedor tiene el derecho de No llegar a contratar porque perjudica su patrimonio inclusive se somete a la sanción administrativas, que luego hará valer su derecho ante la autoridad competente.

- 4. ¿Considera usted que resulta evidente detectar el riesgo de incumplimiento de la obligación de contratar del proveedor, cuando su mejora de precio difiere exorbitantemente de sus demás competidores, en un precio 95% menor del valor referencial, en la subasta inversa electrónica?**

Al parecer no detectan este erro que es parte del diseño de la Institución del Estado, porque si sería así, No debería dejar avanzar al proveedor, pero si lo dejan avanzar a tal punto que el Área usuaria es el que al verse en un conflicto de negativa de celebrar el contrato porque se le ha dado el precio unitario y no por volumen, siendo el error de la Institución del Estado.

- 5. ¿Cree usted que es incorrecto e ineficiente que la Entidad deba esperar el plazo de la obligación de contratar con el proveedor, habiendo este advertido en la misma fecha y después del otorgamiento de la buena pro el error involuntario en la mejora del precio de su oferta en el procedimiento en la subasta inversa electrónica?**

Es irregular la actuación de la Entidad

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Identificar cuál es el efecto del error de hecho del proveedor frente a la sanción basada en el principio de tipicidad.

Preguntas:

- 6. En su opinión ¿Cree usted que los defectos en el discernimiento de la voluntad del proveedor, como el error, durante el procedimiento de**

selección de una subasta inversa electrónica son calificables como infracción administrativa, de acuerdo a la Ley N° 30225?

Lo que sucede es que el proveedor llega hasta la etapa final con el precio Unitario, y al momento de celebrar el contrato es lógico que se haga una suma básica precio unitario por el volumen, ese monto es el que debe ser contrato, sin embargo, por un error provocado por las propias instituciones, termina aceptando una sanción en vez de perder su capital o patrimonio.

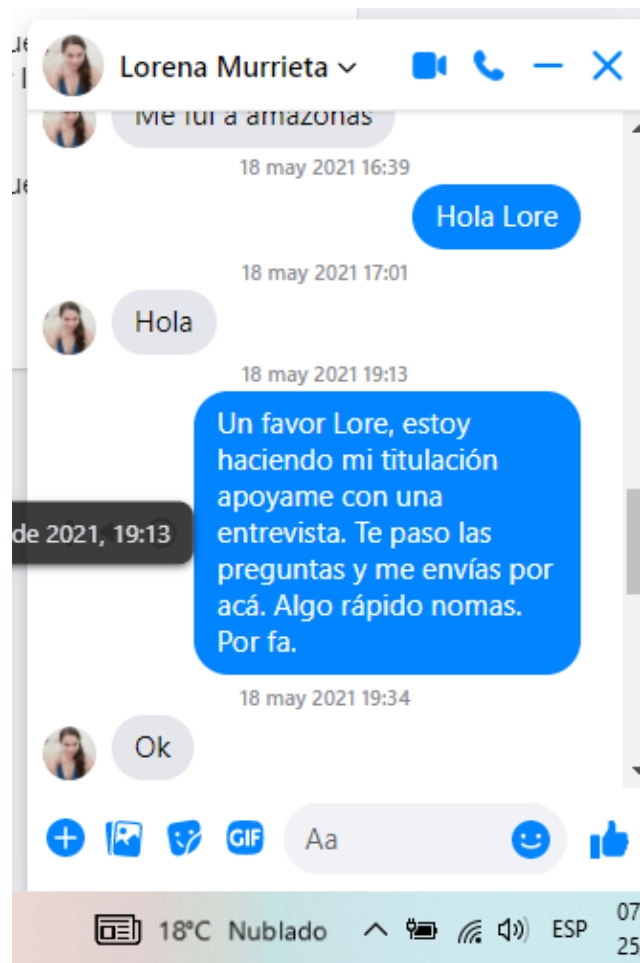
7. ¿Está usted de acuerdo en que, registrar una oferta económica desproporcionalmente baja para luego incumplir la obligación de contratar con la Entidad debe ser calificable como infracción administrativa?

No debe dar lugar a dicha sanción administrativa en la medida que corrija su error la Institución No el proveedor.

8. En su opinión ¿Considera usted que, para el TCE prevalece más el hecho sobre la conducta, al calificar al proveedor con una infracción administrativa por incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad derivado de una oferta económica desproporcionalmente baja en un procedimiento de subasta inversa electrónica?

TEC, al parecer No está realizando un análisis del procedimiento que es provocado e inducido a error a los proveedores por ello es de responsabilidad de las Instituciones encargadas del proceso. Siendo necesario delimitar la responsabilidad de la Entidad y de la OSCE.

SELLO	FIRMA
Lorena Murrieta Tochon CAL N° 74931	



GUÍA DE ENTREVISTA

TÍTULO:

El vicio de la voluntad en la oferta frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020.

INDICACIONES: El presente instrumento tiene como propósito recaudar su opinión respecto a las infracciones a proveedores que presentan ofertas desproporcionalmente bajas en procedimientos de subasta inversa electrónica, motivo por el cual se le pide responder las siguientes preguntas con la mayor seriedad y compromiso.

Entrevistado/a : Annie Carolina Mayo Baldoceda
Cargo : Abogada de la Oficina de Abastecimiento
Institución : Ministerio Público

OBJETIVO GENERAL

Analizar de qué manera el vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020.

Preguntas:

- 1. En su opinión ¿Considera usted que, para la validez de una oferta es relevante el discernimiento de la voluntad del proveedor, al tenerse como mejora un precio exorbitantemente inferior en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica?**

Por supuesto que es relevante el discernimiento para la validez de una oferta, ya que la oferta es un acto que nace de la voluntad del proveedor del querer contratar.

- 2. En su criterio ¿Por qué un proveedor que declaró como mejora un precio por debajo del 95% menor del valor referencial en una subasta inversa electrónica, en evidente perjuicio patrimonial para él, resultaría amparable legalmente inaplicar la infracción que constituye el incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad?**

El proveedor al participar en un procedimiento se somete a las reglas preestablecidas, nadie obliga a alguien a participar; por tanto, si oferta un precio por menor que sea debe cumplir con su obligación, de lo contrario afectaría a los demás competidores.

3.¿Está usted de acuerdo que el TCE considere, en evidente desproporción de una mejora de precio en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica, al error como factor ajeno a la voluntad del infractor?

El proveedor es responsable de tomar la debida diligencia para evitar errores, no obstante, puede existir casos fortuitos o de fuerza mayor ajenos a la voluntad del postor que pueden provocar errores los cuales pueden eximir de responsabilidad al proveedor.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Determinar efecto de la aplicación del principio de razonabilidad de la sanción frente al error de derecho en la declaración de oferta.

Preguntas:

4. En su opinión ¿Cree usted que, beneficia o perjudica al proveedor en su cumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad, el que se establezca en el reglamento de la Ley N° 30225 una disposición contraria frente a una indicación del SEACE en el proceso de Mejora de Precios?

Entiendo que, si el reglamento señala una disposición y el SEACE otra contraria a esta, se debería cumplir lo que el reglamento establece.

5. ¿Considera usted que resulta evidente detectar el riesgo de incumplimiento de la obligación de contratar del proveedor, cuando su mejora de precio difiere exorbitantemente de sus demás competidores, en un precio 95% menor del valor referencial, en la subasta inversa electrónica?

Si bien es cierto puede que un precio 95% menor al valor referencial puede parecer exagerado, bajo en principio de buena fe se debe interpretar que lo declarado es voluntad del proveedor de querer contratar con ese precio.

6. ¿Cree usted que es incorrecto e ineficiente que la Entidad deba esperar el plazo de la obligación de contratar con el proveedor, habiendo este advertido en la misma fecha y después del otorgamiento de la buena pro el error involuntario en la mejora del precio de su oferta en el procedimiento en la subasta inversa electrónica?

El plazo para el perfeccionamiento contractual debe respetarse porque es un derecho del contratista, si este advierte que un error y añade que desiste de su oferta podría estar inmerso en una infracción.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Identificar cuál es el efecto del error de hecho del proveedor frente a la sanción basada en el principio de tipicidad.

Preguntas:

7. En su opinión ¿Cree usted que los defectos en el discernimiento de la voluntad del proveedor, como el error, durante el procedimiento de selección de una subasta inversa electrónica son calificables como infracción administrativa, de acuerdo a la Ley N° 30225?

El error es un vicio accidental del acto, cuya consecuencia puede generar la invalidez de la oferta, en cambio la infracción es el reproche sobre una determinada intencionalidad de una conducta determinada, por lo que no puede considerarse al error como infracción.

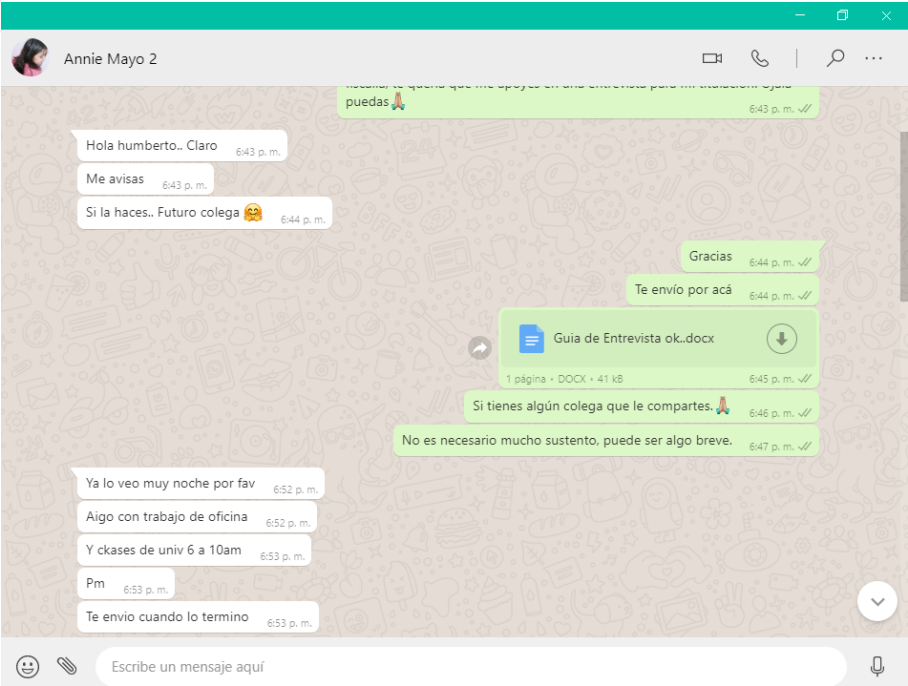
8. ¿Está usted de acuerdo en que, registrar una oferta económica desproporcionalmente baja para luego incumplir la obligación de contratar con la Entidad debe ser calificable como infracción administrativa?

No, porque podría bastar con la declaración de invalidez de la oferta del proveedor que realiza una oferta temeraria que no garantice el cumplimiento de las prestaciones.

9. En su opinión ¿Considera usted que, para el TCE prevalece más el hecho sobre la conducta, al calificar al proveedor con una infracción administrativa por incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad derivado de una oferta económica desproporcionalmente baja en un procedimiento de subasta inversa electrónica?

La Ley N° 30225, establece determinadas conductas que causan determinados hechos como sancionables, porque lo que la conducta prevalece sobre el hecho.

SELLO	FIRMA



GUÍA DE ENTREVISTA

TÍTULO:

El vicio de la voluntad en la oferta frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020.

INDICACIONES: El presente instrumento tiene como propósito recaudar su opinión respecto a las infracciones a proveedores que presentan ofertas desproporcionalmente bajas en procedimientos de subasta inversa electrónica, motivo por el cual se le pide responder las siguientes preguntas con la mayor seriedad y compromiso.

Entrevistado/a : Cesar Enrique Ferreyros Aparicio
Cargo : Abogado Independiente
Institución : Independiente

OBJETIVO GENERAL

Analizar de qué manera el vicio de la voluntad en la oferta incide frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020.

Preguntas:

1. En su opinión ¿Considera usted que, para la validez de una oferta es relevante el discernimiento de la voluntad del proveedor, al tenerse como mejora un precio exorbitantemente inferior en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica?

Considero que no es relevante el discernimiento de la voluntad del proveedor, pues lo que se busca es el menor precio.

2. En su criterio ¿Por qué un proveedor que declaró como mejora un precio por debajo del 95% menor del valor referencial en una subasta inversa electrónica, en evidente perjuicio patrimonial para él, resultaría amparable legalmente inaplicar la infracción que constituye el incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad?

Considero que si resultaría amparable, pues no habría norma que restrinja al proveedor que realice la mejora de precio y aunque podría perjudicarlo patrimonialmente, podría tener argumentos relevantes para dicha acción.

3. ¿Está usted de acuerdo que el TCE considere, en evidente desproporción de una mejora de precio en consideración al valor referencial y las demás ofertas en la subasta inversa electrónica, al error como factor ajeno a la voluntad del infractor?

No estoy de acuerdo, pues dicha desproporción podría ser estrategia de posicionamiento del proveedor o remate de saldo de bienes, etc.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Determinar efecto de la aplicación del principio de razonabilidad de la sanción frente al error de derecho en la declaración de oferta.

Preguntas:

4. ¿Cree usted que, de declararse ganador a un proveedor por establecerse en el proceso de Mejora de Precio del SEACE una indicación contraria a lo dispuesto al Reglamento de la Ley N° 30225, perjudicaría o beneficiaría al proveedor en el cumplimiento del perfeccionamiento contractual con la Entidad?

Creo que perjudica al proveedor, pues dicha disposición contraria podría limitar el derecho del proveedor de mejorar el precio.

5. ¿Considera usted que resulta evidente detectar el riesgo de incumplimiento de la obligación de contratar del proveedor, cuando su mejora de precio difiere exorbitantemente de sus demás competidores, en un precio 95% menor del valor referencial, en la subasta inversa electrónica?

Considero que sí, pues la mejora del precio no debería ser causal de impedimento de contratar.

- 6. ¿Cree usted que es incorrecto e ineficiente que la Entidad deba esperar el plazo de la obligación de contratar con el proveedor, habiendo este advertido en la misma fecha y después del otorgamiento de la buena pro el error involuntario en la mejora del precio de su oferta en el procedimiento en la subasta inversa electrónica?**

Creo que es correcto pues habiéndose advertido el error, estaría corriendo el tiempo o plazo innecesario.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Identificar cuál es el efecto del error de hecho del proveedor frente a la sanción basada en el principio de tipicidad.

Preguntas:

- 7. En su opinión ¿Cree usted que los defectos en el discernimiento de la voluntad del proveedor, como el error, durante el procedimiento de selección de una subasta inversa electrónica son calificables como infracción administrativa, de acuerdo a la Ley N° 30225?**


Creo que si son calificables como infracción administrativa cuando el proveedor no describa a detalle la composición de su oferta para demostrar que cumpliría con sus obligaciones del contrato.

- 8. ¿Está usted de acuerdo en que, registrar una oferta económica desproporcionalmente baja para luego incumplir la obligación de contratar con la Entidad debe ser calificable como infracción administrativa?**

Por supuesto que sí, pues es innecesario de actividad administrativa además podría afectar gravemente dicho proveedor y favorecer a otros

- 9. En su opinión ¿Considera usted que, para el TCE prevalece más el hecho sobre la conducta, al calificar al proveedor con una infracción administrativa por incumplimiento de la obligación de contratar con la Entidad derivado de una oferta económica desproporcionalmente baja en un procedimiento de subasta inversa electrónica?**

Considero que si, pues el proveedor podría tener fundamentos o razones suficientes y lícitas para realizar una mejora desproporcionalmente baja.

SELLO	FIRMA
<p>.....</p> <p>CESAR ENRIQUE FERREYROS APARICIO ABOGADO Reg. 83600</p>	

ANALISIS DOCUMENTAL

Objetivo General: Analizar de qué manera el vicio de la voluntad incide frente a la inaplicación de infracción administrativa en la subasta inversa electrónica de la Ley N° 30225, en Lima 2020.

AUTOR: Humberto Portocarrero Canchari

FECHA: 2/06/2021

FUENTE DOCUMENTAL	CONTENIDO DE LA FUENTE A ANALIZAR	ANÁLISIS DEL CONTENIDO	CONCLUSIÓN
Tribunal de Contrataciones del Estado. Tercera Sala. Expediente N° 058.2012.TC, Reneé Buendía Paladín; 26 de junio de 2014.	“si bien la omisión del infractor se condice con el tipo establecido en la norma, pueden darse casos particulares de evidente manifestación en que dicha omisión se vea influenciada por factores ajenos a la voluntad del infractor” (Fundamento N° 18, Resolución N° 996-2012-TC-S3)	<p>Al respecto, el 22 de junio de 2012, se inició el procedimiento sancionador a Reneé Buendía Paladín, por no mantener su oferta hasta la firma del contrato, la cual se encuentra prevista como infracción administrativa.</p> <p>El adjudicatario manifestó que, durante el periodo de lance, como consecuencia de un error involuntario en la digitación del valor de su oferta, ofertó S/. 15,300.00, debiendo ser S/. 153,000.00, por la cantidad de 12,450 galones de petróleo. Asimismo, alegó que el monto ofertado resulta ilógico e irrazonable si se tiene en cuenta que el costo del producto en el mercado es de S/. 11.50 y el precio unitario de su oferta resultaría de S/. 1.22.</p> <p>El TCE argumento que a pesar de una debida diligencia puede existir error esencial en la oferta del postor aplicable excepcionalmente en el ámbito administrativo, pues la transcripción del precio ofertado es resultado de “la falsa representación de la realidad o como la</p>	El error esencial puede ser aplicable en los casos en el que el precio ofertado no resulta razonable e ilógico, al ser influenciado por la disconformidad entre el conocimiento y la realidad de las cosas, siendo excepcional su aplicación en la relación jurídica con la Administración Pública.

		<p>disconformidad entre el conocimiento y la realidad de las cosas”.</p> <p>Por la cual se resolvió no ha lugar la imposición de sanción a la proveedora Reneé Buendía Paladín, por su responsabilidad de no mantener su oferta hasta el consentimiento de la buena pro; 28 de setiembre de 2012.</p>	
--	--	---	--

AUTOR: Humberto Portocarrero Canchari

FECHA: 2/06/2021

FUENTE DOCUMENTAL	CONTENIDO DE LA FUENTE A ANALIZAR	ANÁLISIS DEL CONTENIDO	CONCLUSIÓN
Tribunal de Contrataciones del Estado. Primera Sala. Expediente N° 3901-2013-TC, Troya Contratista Generales E.I.R.L.; 26 de junio de 2014.	“En los casos en que la conducta se ve influenciada por factores que afectan la voluntad del supuesto infractor, tales como el error, al establecer una relación jurídica con la Administración en evidente perjuicio patrimonial para él, no puede sostenerse que su desistimiento plasma un incumplimiento de su deber con la Administración” (Fundamento N° 14, Resolución N° 1552-2014-TC-S1.)	<p>Al respecto, el 6 de enero de 2014 se inició el procedimiento sancionador a Troya Contratista Generales E.I.R.L., por presuntamente desistirse de su oferta presentada, hecho tipificado como infracción administrativa.</p> <p>El adjudicatario manifestó que consignó un monto erróneo en su propuesta económica el valor referencial del proceso de selección era de S/. 63,720.00 y la oferta presentada por el adjudicatario fue de S/. 3,400.00 para la contratación del servicio de deshierbe, retiro, de malezas y limpieza de cuneta en zona interior de planta 1 y 2 de Planta de Yurimaguas.</p> <p>El TCE argumentó que el error es un factor que afecta la voluntad del postor, pues el precio consignado no refleja la intención real de una relación jurídica, cuando se puede advertirse evidentemente el perjuicio patrimonial en el declarante.</p> <p>Por la cual se resolvió no ha lugar la imposición de sanción a la empresa Troya Contratista Generales E.I.R.L., en su responsabilidad de no mantener su oferta hasta el consentimiento de la buena pro; 26 de junio de 2014.</p>	En los casos en que el precio de la oferta advierta un precio desproporcional inferior en comparación del valor referencial, el error como un factor ajeno a la voluntad del postor es causal de justificación, al consignarse un precio en evidente perjuicio patrimonial para el declarante del acto, no pudiendo sostenerse que el desistimiento se plasma en una conducta injustificada en el incumplimiento de su obligación con la Administración.

AUTOR: Humberto Portocarrero Canchari

FECHA: 2/06/2021

FUENTE DOCUMENTAL	CONTENIDO DE LA FUENTE A ANALIZAR	ANÁLISIS DEL CONTENIDO	CONCLUSIÓN
Tribunal de Contrataciones del Estado. Primera Sala. Expediente N° 1114/2012, Neox Corporation S.A.C.; 25 de febrero de 2013.	“Si bien la omisión del infractor se condice con el tipo establecido en la norma, pueden darse casos particulares de evidente manifestación en que dicha omisión se vea influenciada por factores ajenos a la voluntad del infractor, tales como el error, al establecer una relación jurídica con la Administración en evidente perjuicio patrimonial de aquella” (Fundamento N° 25, Resolución N° 369-2013-TC-S1)	<p>Al respecto, el 2 de agosto de 2012 se inició el procedimiento sancionador a Neox Corporation S.A.C., por presuntamente no haber recibido injustificadamente la orden de compra, supuesto contemplado como infracción administrativa</p> <p>El adjudicatario manifestó que desistió, debido a un error involuntario, sin animus de perjuicio, consignó el importe de S/. 3,245.00 en lugar de S/. 32,450.00, por el total de 11 proyectores multimedia, no existiendo correlación lógica y real entre el precio ofertado y el costo del producto, ya que cada unidad cuesta \$890.09, siendo sustancialmente irreal la oferta declarada y el precio referente.</p> <p>El TCE argumento que el error alegado desvanece objetivamente el nexo causal, pues a pesar de una debida diligencia puede concluirse razonablemente que existió un error que vició la voluntad del postor, pues el precio consignado no refleja la intención real de la relación jurídica, cuando es evidente el perjuicio patrimonial en una de las partes.</p> <p>Por la cual se resolvió no ha lugar la imposición de</p>	La falta de correlación lógica y real entre la propuesta económica y el costo del producto en el mercado, es eximente de responsabilidad, ya que el factor error como vicio de la voluntad puede presentarse en propuestas con evidente desproporción real entre el monto ofertado y el costo del producto.

		sanción a la empresa Troya Contratista Generales E.I.R.L., en su responsabilidad de no mantener su oferta hasta el consentimiento de la buena pro; 26 de junio de 2014.	
--	--	---	--

Objetivo Especifico 1: Determinar efecto de la aplicación del principio de razonabilidad de la sanción frente al error de derecho en la declaración de oferta.

AUTOR: Humberto Portocarrero Canchari

FECHA: 2/06/2021

FUENTE DOCUMENTAL	CONTENIDO DE LA FUENTE A ANALIZAR	ANÁLISIS DEL CONTENIDO	CONCLUSIÓN
<p>Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, actualizado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF.</p>	<p>“Precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas.</p> <p>En el caso de bienes, servicios en general y consultorías, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios en función de las cantidades referenciales contenidas en los documentos del procedimiento de selección y que se valorizan en relación a su ejecución real, durante un determinado plazo de ejecución...” (Literal b), del artículo 35°)</p>	<p>Sobre el particular, debemos traer a colación el numeral 2.3 del Manual de Usuario para Proveedores del Estado y el numeral 7.3.2 de la Directiva N° 006-2019-OSCE/CD, las cuales es importante señalar que no establecen en el proceso de “Mejora Precios” se deba registrar el precio total o precio unitario; no obstante, el SEACE es quien alerta y compara la diferencia existente entre la mejora de precio y la oferta inicial que se está realizando, sin indicar expresamente que se debe registrar el precio total.</p> <p>Ahora bien, el Reglamento señala expresamente que, en el sistema de contratación de “Precios Unitarios”, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios, toda vez que la cantidad a contratar no se encuentra determinada.</p> <p>En ese sentido, existe un error de prohibición y un vacío al momento del realizar la mejora de precio por no encontrarse previsto normativamente que en la etapa de lances deba consignar el precio total, pudiendo el postor registrar el precio</p>	<p>Los efectos del SEACE como medio transmisor de la voluntad del declarante, no se condice con lo dispuesto con el Reglamento de la Ley N° 30225, existiendo una disposición contraria, induciendo a error la voluntad del postor que oferta un precio creyendo estar actuando legalmente, siendo aplicable el error de derecho, pues quien actúa inducido por la disposición de una norma jurídica, como es el caso de registrar el precio unitario conforme lo establece el reglamento, dicho acto puede ser considerado anulable por la distorsión jurídica.</p>

		unitario legalmente, conforme al Reglamento de la Ley N° 30225.	
--	--	---	--

AUTOR: Humberto Portocarrero Canchari

FECHA: 2/06/2021

FUENTE DOCUMENTAL	CONTENIDO DE LA FUENTE A ANALIZAR	ANÁLISIS DEL CONTENIDO	CONCLUSIÓN
Socías, C. J. (2002). Error material, error de hecho y error de derecho. Concepto y mecanismos de corrección. Revista de administración pública, (157), 157-2014. Recuperado a partir de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=246395	“Frente al error que recae sobre situaciones fácticas se encuentra el error de derecho, que, al igual que en el ámbito civilista, es aquel que se padece al razonar para aplicar las normas jurídicas a los hechos”.	<p>Sobre el particular, el error de derecho consiste en una conducta del sujeto que actúa voluntariamente creyendo cumplir con una disposición del ordenamiento jurídico, pero es una interpretación equivocada del ordenamiento jurídico. Este tipo de inconvenientes se presenta a consecuencias de vacíos normativos, cuya distorsión es por falta de desarrollo o divergencia jurídica.</p> <p>Tanto en el ámbito civil y administrativo, el agente que declara su voluntad con sujeción a una norma que presenta contradicción con otra el acto es considerado invalido, puede ser declarado nulo y retrotraerse hasta a la etapa antes de originarse el vicio si rompe la lógica esencial del acto, toda vez que se trata de un error relevante para el derecho, en el que el agente tuvo una apreciación jurídica distorsionada.</p> <p>En ese sentido, la nulidad es aplicable al error de derecho en el ámbito administrativo por situaciones basadas en valoración meramente jurídicas que recae en el un acto ilegal por no ajustarse al ordenamiento jurídico</p>	El error de derecho es un tipo de vicio del acto administrativo, la cual corresponde la Entidad poder corregir, efectuando la revisión de oficio que contempla el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyo acto defectuoso puede ser nulo y retrotraerse hasta la etapa previa al vicio de la voluntad, toda vez que en el declarante actuó conforme al ordenamiento jurídico, utilizando la norma de mayor jerarquía.

		resultando sancionable con nulidad de acuerdo al artículo 44 de la Ley N° 30225.	
--	--	---	--

AUTOR: Humberto Portocarrero Canchari

FECHA: 2/06/2021

FUENTE DOCUMENTAL	CONTENIDO DE LA FUENTE A ANALIZAR	ANÁLISIS DEL CONTENIDO	CONCLUSIÓN
Código Civil (CC). Ley 23403 de 1982. 27 de mayo de 1982 (Perú)	<p>“Artículo 201.- Requisitos de error</p> <p>El error es causa de anulación del acto jurídico cuando sea esencial y conocible por la otra parte.</p> <p>Artículo 202.- Error esencial</p> <p>El error es esencial:</p> <p>(...)</p> <p>3. Cuando el error de derecho haya sido la razón única o determinante del acto.</p> <p>Artículo 203.- Error conocible</p> <p>El error se considera conocible cuando, en relación al contenido, a las circunstancias del acto o a la calidad de las partes, una persona de normal diligencia hubiese podido advertirlo.”</p>	<p>Sobre el particular, la manifestación de voluntad del administrado se adecua dentro del concepto de la autonomía privada de los negocios, la cual rige el ámbito del Derecho privado, toda vez que los actos declarados se circunscriben en las tratativas de la celebración de un contrato.</p> <p>En los procedimientos de contratación, para la validez del negocio los actos reciben la tutela del Derecho administrativo tanto del Derecho privado, el contrato administrativo debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 201° del Código Civil, el cual establece que “el error es causa de anulación del acto jurídico, cuando sea esencial y conocible por la otra parte”, la cual puede ser llevada al ámbito administrativo.</p> <p>Así, tenemos que el error es esencial cuando recae a razón de un error de derecho como determinante del acto, pues la distorsión de una disposición induce la voluntad del sujeto a realizar determinada acción creyendo estar en lo correcto. Asimismo, se señala que para que aplique la anulación del acto debe ser conocible por la otra parte, ello resulta importante, toda vez que permite a la Administración advertir previamente en caso de una anomalía a fin de continuar con el consentimiento del acto, siendo evidente la desproporción irrazonable de la oferta.</p>	<p>La Administración cuya intención es celebrar un negocio con un postor administrado, debe tener en cuenta el criterio del error establecida en el Código Civil, la cual establece al error de derecho como causa de anulación del acto jurídico ajeno a la voluntad del sujeto por distorsionada de una realidad jurídica, se ejecuta un acto creyendo actuar bajo una disposición normativa, generando así la invalidez del acto y la anulación respectiva, toda vez el sujeto actuó inducido a error de derecho que era conocible por la Administración.</p>

Objetivo Especifico 2: Identificar cuál es el efecto del error de hecho del proveedor frente a la sanción basada en el principio de tipicidad.

AUTOR: Humberto Portocarrero Canchari

FECHA: 2/06/2021

FUENTE DOCUMENTAL	CONTENIDO DE LA FUENTE A ANALIZAR	ANÁLISIS DEL CONTENIDO	CONCLUSIÓN
Tribunal de Contrataciones del Estado. Primera Sala. Expediente N° 1114/2012, Neox Corporation S.A.C.; 25 de febrero de 2013.	“existiendo desequilibrio y desigualdad, la Entidad no puede obligar a un administrado a firmar contrato y a mantener su oferta bajo estas condiciones, pues eso implicaría un abuso del derecho, situación bajo la cual el titular de un derecho dirige contra la parte una exigencia que concuerda con la norma legal, pero que su ejercicio lesiona la buena fé y los fines sociales y económicos del Derecho” (Fundamento N° 30, Resolución N° 369-2013-TC-S1)	<p>Al respecto, Tribunal de Contrataciones del Estado ha señalado que el Estado debe actuar conforme a los criterios de la buena fe, esto quiere decir que en un negocio jurídico ambas partes tienen que ganar por equidad concordante con la máxima del equilibrio económico en los contratos.</p> <p>La oferta con evidente desproporción en comparación al valor referencial y a los demás competidores, advierte razonablemente el desequilibrio económico desvaneciendo objetivamente el nexo causal entre la voluntad y el supuesto sancionable.</p> <p>El Estado no puede someter al administrado, aprovechándose de su facultad para crear derechos y obligaciones, cuando se evidencia una razonable desproporción de su oferta, dicha situación vulneraría el principio de equidad y buena fé por un uso abusivo de la prerrogativa que tiene el Estado.</p>	Frente al acto con error de hecho recae la sanción de nulidad, el Estado debe valorar los hechos sin salir favorecido a expensas de los de los errores de los postores, pues de no valorar correctamente puede perjudicar económicamente a los postores manteniendo la validez del acto, simulando que este sirve a un interés público efectivo.

AUTOR: Humberto Portocarrero Canchari

FECHA: 2/06/2021

FUENTE DOCUMENTAL	CONTENIDO DE LA FUENTE A ANALIZAR	ANÁLISIS DEL CONTENIDO	CONCLUSIÓN
Socías, C. J. (2002). Error material, error de hecho y error de derecho. Concepto y mecanismos de corrección. Revista de administración pública, (157), 157-2014. Recuperado a partir de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=246395	“El Derecho positivo trata de manera distinta, como puede ser de otra manera, al acto viciado, de error material, al acto dictado con error de hecho”.	<p>Sobre el particular, la falta de una adecuada delimitación genera confusión en el error de material y error de hecho en el ámbito del derecho administrativo, pues se vuelve incomprensible su entendimiento para la Administración.</p> <p>Asimismo, este tipo de inconvenientes genera una gran inseguridad jurídica, pues la Administración no identifica correctamente la acción a realizar en dichos casos, por lo que es necesario la indagación de los hechos para proceder a la toma de decisión administrativa.</p> <p>En ese sentido, la Administración suele cometer equivocaciones al no valorar los hechos facticos en el caso concreto, es decir no diferencia entre el error material y error hecho, esta última que vicia la causa del acto considerada esencial.</p>	El error de hecho, a causa de consignar el precio unitario en lugar del precio total por la equivocada creencia que esta tiene más relevancia en la ejecución del contrato, merece el analices de los hechos facticos previo a emitir acto administrativo a la Entidad, con la finalidad de comprobar y valorar los hechos, pues a pesar de una debida diligencia pueden existir factores ajenos a la voluntad del postor que son esenciales para la validez del acto.

AUTOR: Humberto Portocarrero Canchari

FECHA: 2/06/2021

FUENTE DOCUMENTAL	CONTENIDO DE LA FUENTE A ANALIZAR	ANÁLISIS DEL CONTENIDO	CONCLUSIÓN
Tribunal de Contrataciones del Estado. Primera Sala. Expediente N° 3901-2013-TC, Troya Contratista Generales E.I.R.L.; 26 de junio de 2014.	<p>“Considerando lo expresado por el adjudicatario la conducta asociada a un error no permite inferir o atribuir que el presente caso este haya incurrido en la infracción establecida(.) en la medida que la comisión de una infracción supone la realización de una conducta administrativamente ilícita que amerita la asignación de responsabilidades por la afectación de los bienes jurídicos que se protege con su previsión”</p> <p>(Fundamento N° 12, Resolución N° 1552-2014-TC-S1.)</p>	<p>El Tribunal de Contrataciones del Estado ha manifestado que la infracción administrativa es la comisión de una conducta desplegada para la realización de un hecho ilícito; no obstante, la conducta asociada a un error forma parte de la posibilidad de que se haya cometido a causa del desconocimiento o falsa representación de la realidad, como es el error de hecho.</p> <p>Al respecto, debe advertirse que, bajo principio de la tipicidad en materia sancionadora administrativa, nadie puede ser sancionado por una conducta no prevista claramente en la ley, la falta en la obligación de suscripción de contrato por un error podría plantearse varios supuestos de conductas infractoras, siendo la primera el desistimiento o retiro injustificado de la oferta y segundo el incumplimiento de perfeccionamiento de contrato, pareciendo el primer supuesto un acto consecuente de un error de hecho que puede ser justificante de irresponsabilidad.</p> <p>En consecuencia, este primer supuesto, no se encuentra debidamente delimitado, pues el término “injustificado” es indeterminado y sujeta a</p>	<p>El error de hecho no se encuentra calificado como infracción sujeta a sanción, pues la conducta del agente que declara involuntariamente un precio en lugar de otro creyendo estar en lo correcto, la oferta forma parte de una inestabilidad de un acto evidentemente irrazonable, al no ser bien formulada puede ser justificación eximente de responsabilidad, teniendo en cuenta además la subjetividad del término “injustificado” no se aplica correctamente por no respetar el principio de tipicidad presentadas por los postores.</p>

		los miembros del TCE puedan establecer responsabilidad a su simple interpretación, de modo que no se sabe lo que está prohibido o lo que está permitido.	
--	--	--	--